



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y
PROCESAL PENAL**

Efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito
Judicial de Lima Norte.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTORA:

Br. Laura Azucena Lloclla Palomino (ORCID: 0000-0002-3680-2844)

ASESOR:

Dr. Noel Alcas Zapata (ORCID: 0000-0001-9308-4319)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2019

Dedicatoria

A mi padre, Miguel Ángel, con profundo e infinito amor, quien es mi ejemplo de sacrificio, disciplina y constante trabajo en la vida, que día a día se esfuerza por darme lo mejor.

A mi madre, María Sabel, quien es mi eterno amor, por su constante motivación y por brindarme su gran apoyo incondicional, comprensión, tiempo de dedicación y perseverancia.

Agradecimiento

A Dios, por iluminar mi camino, alegrar mis días y darme fortaleza para seguir adelante, a pesar de las dificultades que se presentan día a día.

A mis padres por su gran apoyo emocional y económico, además de estar siempre a mi lado dándome los mejores ánimos y consejos, gracias a ellos he llegado muy lejos.

A mi Asesor de tesis, Doctor Noel Alcas Zapata, por haberme orientado y apoyado en todo momento en mi labor científica.



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DE TESIS

EL / LA BACHILLER (ES): LLOCLLA PALOMINO, LAURA AZUCENA

Para obtener el Grado Académico de *Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal*, ha sustentado la tesis titulada:

EFFECTOS DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE

Fecha: 17 de agosto de 2019

Hora: 3:30 p.m.

JURADOS:

PRESIDENTE: Dr. Luis Alberto Nuñez Lira

Firma:

SECRETARIO: Mg. Víctor Paolo Cuya Chamilco

Firma:

VOCAL: Dr. Noel Alcas Zapata

Firma:

El Jurado evaluador emitió el dictamen de:

Aprobar por unanimidad

Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis:

.....
.....
.....
.....

Recomendaciones sobre el documento de la tesis:

.....
.....
.....
.....

Nota: El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, para presentar la tesis habiendo incorporado las recomendaciones formuladas por el jurado evaluador.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Laura Azucena Lloclla Palomino, estudiante de la Escuela de Posgrado, Maestría Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte; declaro el trabajo académico titulado “Efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.” presentada, en 145 folios para la obtención del grado académico de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.

Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional. Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.

De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 13 de agosto del 2019



El autor

Presentación

Señores miembros del jurado calificador

Presento a ustedes mi tesis titulada “Efectos del Requerimiento de Prisión Preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.”, cuyo objetivo fue determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra.

En el presente trabajo, se realiza un análisis de los elementos que se encuentran tipificado en el artículo 268 de Código Procesal Penal respecto al delito de Robo Agravado, siendo los presupuestos procesales para el requerimiento de la Prisión Preventiva. El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; el capítulo III se refiere a resultados; IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.

Los resultados obtenidos en la presente investigación han sido obtenidos media ante los instrumentos de recolección de datos: Guía de entrevista, análisis Jurisprudencial y Análisis de la Legislación Nacional, en donde se realizó teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Los Olivos, 13 de agosto del 2019



.....
Laura Azucena Lloclla Palomino

Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del Jurado	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	ix
Abstract	x
Introducción	11
I. Método	31
II. Tipo y diseño de investigación	31
2.1. Escenario de estudio	32
2.2. Participantes	32
2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	35
2.4. Procedimiento	35
2.5. Método de análisis de información	35
2.6. Aspectos éticos	35
III. Resultados	36
IV. Discusión	60
V. Conclusiones	68
VI. Recomendaciones	72
Referencias	74
Anexos	80

Anexo 1:	Matriz de categorización de datos	80
Anexo 2:	Instrumentos de recolección de datos	83
Anexo 3:	Entrevistas	89

Resumen

La presente investigación titulada: Efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte, tuvo como objetivo general determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

El método empleado fue deductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo, fue de enfoque cualitativo, de diseño no experimental. La población estuvo formada por los miembros jurídicos del distrito Judicial de Lima Norte, la muestra por 06 miembro. La técnica empleada para recolectar información fue la entrevista a profundidad y los instrumentos de recolección de datos fueron guías de entrevistas, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos.

Se llegó a la siguiente conclusión: que se trasgrede la normatividad vigente y por consiguiente limita el derecho fundamental de la libertad, principios de presunción de inocencia, legalidad y bien jurídico protegido, además de ello se determinó que no existe una concordancia interpretativa entre los operadores jurídicos, en base a la incorporación de los dos presupuestos adicionales, dados por la Casación 626-2013 Moquegua, es decir la proporcionalidad de la Medida y duración de la medida.

Palabras claves: Prisión preventiva, peligro, procesal, ultima ratio, legalidad, presunción de inocencia

Abstract

The present investigation entitled: Effects of the requirement of preventive detention in the crime of aggravated robbery in the Judicial District of Lima Norte, had as a general objective to determine what are the effects of the requirement of preventive detention in the crime of aggravated robbery in the Judicial District of North Lima

The method used was deductive, the type of research was basic, descriptive level, was a qualitative approach, not experimental design. The population was formed by the legal members of the Judicial District of North Lima, the sample by 06 member. The technique used to gather information was the in-depth interview and the data collection instruments were interview guides, which were duly validated through expert judgments.

The following conclusion was reached: that the current regulations are transgressed and therefore limits the fundamental right of freedom, principles of presumption of innocence, legality and protected legal good, in addition to this it was determined that there is no interpretative agreement between the operators legal, based on the incorporation of the two additional budgets, given by Cassation 626-2013 Moquegua, that is to say the proportionality of the Measure and duration of the measure.

Key words: Preventive prison, danger, procedural, last ratio, legality, presumption of innocence

I. Introducción

La aproximación temática es aquella redacción ordenada y coherente de una investigación, contando con los hechos que van a permitir comprender el origen del problema. (Silva, 2013)

Podemos ver muchos casos de robo, ya sea en periódicos, revistas, o canales de televisión, y nos enteramos, como la sociedad se encuentra en peligro por este delito, donde muchas veces los delincuentes usan armas punzo cortantes o instrumentos peligrosos para perpetrar su cometido, considerándolo como robo agravado. Estando así, propensos a ser sorprendidos a un asalto o robo, donde podemos recibir agresiones físicas, o amenazas, en cualquier momento. Las personas dentro de la sociedad tienen el derecho a defenderse acudiendo a las organizaciones de justicia, por consiguiente, mientras no se demuestre su culpabilidad, se presume inocente, por otro lado, el derecho penal, está integrado por determinadas normas jurídicas establecidas por un Estado de Derecho. Actualmente se desarrolla el Derecho Procesal Penal, el cual es denominado acusatorio, por eso la persona puede ser acusada, sin embargo, se considerará su presunción de inocencia, por lo cual tendrá la carga de la prueba, debiendo demostrar, que no tuvo culpa ni dolo en el delito, obteniendo así una sentencia a su favor, garantista la cual desarrolla un conjunto de conocimientos capaces de establecer la limitación al poder punitivo del Estado. Durante el proceso, se comprenden ciertas garantías para la efectiva seguridad jurídica de los procesados, además instituciones que aseguran en la arbitrariedad, pero que desconoce principios universales, como lo es, la presunción de inocencia.

La institución a la que referimos es la prisión preventiva, donde nace una desnaturalización de esa medida, toda vez que la prisión preventiva es requerida pese a incumplir con los presupuestos necesarios que instituye el Código Procesal Penal, donde no existen argumentos genéricos y subjetivos, por ello se lesiona el derecho fundamental de la libertad y defensa adecuada. Los Presupuestos de la prisión preventiva que señala el Código Procesal Penal, deben cumplirse para que en base a ello se evalúe el presunto delito cometido por el imputado, y así poder determinar, si amerita la aplicación de dicha medida, en caso se considere, el Fiscal podrá requerir la prisión preventiva al Juez, dando un buen sustento sobre su requerimiento; sin embargo surgen diversos problemas en las condiciones

o requisitos. Surgen casos donde no cumplen con los presupuestos que señala el Código Procesal penal, sin embargo, se decreta la prisión preventiva, y al no establecer suficiencia en los elementos de convicción que determinen que el investigado cometió el delito de robo, surge una injusticia, también se debe considerar, la pena de 4 años debiendo haber un análisis del delito en referencia a la pena concreta.

Otra problemática surge a partir del temor del peligro de fuga, es decir, que el investigado fugue del país, imposibilitando su responsabilidad en caso de resolver una futura sentencia firme, que acredite su culpabilidad. Además, que, en razón a sus antecedentes penales, no se tenga seguridad en cuanto a su estadía y se sospeche que el investigado tratará de entorpecer la búsqueda de la verdad, surgiendo un peligro procesal para la indagación que se está realizando. La privación de la libertad de una persona, no solo afecta derechos fundamentales, si no, diversos principios procesales como el principio de razonabilidad, proporcionalidad y celeridad procesal, además el principio de presunción de inocencia, donde el investigado no será acusado firmemente, considerándose inocente hasta que se corrobore lo contrario y se dicte en una sentencia firme, su culpabilidad. Para poder obtener un proceso penal exitoso, se debería ofrecer una cautelosa revisión de los presupuestos de la prisión preventiva y no como la mayoría de casos desnaturalizando la medida mencionada, pues en la legislación comparada, dicha medida está sometida a un control periódico, rehusando que la persona sea privada de su libertad y no sea reclusa injustamente, evitando que se vulneren sus derechos fundamentales, respetando el debido proceso.

Resulta importante este estudio, para conocer más acerca de esta medida personal, también para los Magistrados que ordenan mandatos de prisión preventiva, deteniendo a personas sin percatarse de la magnitud de dicha medida, permitiéndoles así que puedan percatarse acerca de los reales efectos que implica la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado, donde el investigado pierde su libertad. Por consiguiente, se resolverá tener en cuenta cuales los efectos que surgen a partir del requerimiento de la medida, también qué derechos fundamentales se vulneran y que acciones o procedimientos se podrían tomar en cuenta para evitar su aplicación en el delito de robo, modalidad agravada, buscando respetar los derechos de los investigados sin que se interrumpa la investigación penal correspondiente. La investigación está dirigida a los a todas las personas

que estén interesadas en conocer sobre la aplicación del Mandato de Detención Preventiva en los casos de delitos de robo agravado, asimismo, se encuentra dirigido a los legisladores, Juristas, como Abogados, Jueces Penales, especialmente a los Fiscales de la investigación preparatoria, del Distrito Judicial Lima Norte, también a los estudiantes de derecho y en general, para que puedan tomarlo como referencia informativa o antecedente.

En relación a los trabajos previos revisados en el contexto Internacional, se tiene a Bustamante (2019), quien sostiene que la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra legalizada, siendo una medida que no puede ser aplicación de manera automática en el proceso en cualquier caso, ya que primero, se deben analizar los presupuestos de su aplicación y al no haber un análisis adecuado, se aplica la prisión preventiva, privando libertad al investigado, con la finalidad que este se encuentre en el proceso. Además, Palomino y Quevedo (2015), quienes manifiestan que la garantía de protección del Principio de Presunción de Inocencia es mínima, por lo que se prueba una desprotección cuando se trata de analizar la procedencia de la aplicación de la prisión preventiva, por las autoridades competentes a realizar su función en el Distrito Judicial de Cajamarca. Muchas veces no se considera para el principio de presunción de inocencia, y como consecuencia una vez que se interpone dicha medida, los juristas únicamente se encargan de fundamentar conforme a los requisitos o presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal.

Así mismo Arce (2017), afirma que la adaptación de la prisión preventiva se da sobre hechos, casos vistos graves, es decir, hechos delictivos graves, considerando el principio de proporcionalidad, para su cumplimiento, sin pasar por alto al menos en el sistema vigente con anterioridad a las reformas constitucionales de 2008, además pudo existir un aumento desmedido, surgiendo excesos, para determinar que delitos son merecedores de la prisión preventiva. También Figueroa (2017), sostiene que la prisión preventiva es una medida coercitiva, mediante la cual una persona quedará restringida de su libertad, deberá ser el investigado, dicha medida se dictará durante el proceso, sin embargo, no se considera la regla general para garantizar la presencia del investigado en el proceso penal, además a la víctima se le brindará protección, en contra de la persona que causó el daño o vulnerado los bienes jurídicos. La medida de privación de la libertad, es muy usada innecesariamente, lo cual debería aplicarse para casos donde si haya gravedad, merecedores de aplicarse la prisión preventiva.

Por otra parte Obando (2018), manifiesta que existen casos de delitos, que deben ser sometidos a un análisis, para determinar si requiere de la aplicación de la prisión preventiva, donde se tiene que examinar y fijar los parámetros necesarios, como la proporcionalidad, responsabilidad del hecho delictivo, siendo de gran importancia que haya arraigo social, ya que sin este se estaría cometiendo una irregularidad referente a los presupuestos que deben ser analizados para la aplicación de la prisión preventiva, lo cual está establecido en la norma que debe ser de manera excepcional, sin sobrepasar el marco legal y los tratados internacionales. Además, López (2017), concluye que existe una ligereza en las autoridades judiciales autorizadas, refiriéndose a los jueces penales que ejercen su jurisdicción al momento de disponer la aplicación de la prisión preventiva, en cuanto a la legislación ecuatoriana, donde establecen los presupuestos jurídicos en su artículo 354, de su legislación Penal (Art. 534), debido a que, al momento de dictar la medida de la prisión preventiva, no están contempladas las demás medidas cautelares donde no se privan de su libertad al investigado, y lo más importante es que no se determinan adecuadamente los elementos objetivos y subjetivos que establecen los presupuestos jurídicos de su Código Penal, por ello, el principio de la presunción de inocencia se ve vulnerado.

En relación a los trabajos previos revisados en el contexto Nacional se tiene a Delgado (2017), quién señalo que la medida de la detención preventiva, se caracteriza por ser preventivo, donde se busca prevenir que el investigado huya de la investigación del proceso en la etapa de investigación preparatoria, además tiene un carácter excepcional, es decir, solo deberá aplicarse la prisión preventiva para determinados casos que cumplan con los requisitos establecidos en el código penal. También es importante señalar que el derecho a la libertad que tiene el investigado deberá prevalecer ante cualquier otro interés que se tenga durante el proceso, sin embargo, se exceptúa esta regla, cuando se debe analizar si debe aplicarse o no los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Sin caer el error, de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva como primera ratio, es decir no debe ser solicitada antes de aplicar otras medidas personales, de menor rango, porque en consecuencia podría haber excesivas personas encarceladas injustamente creando sobrepoblación carcelaria.

Así mismo, Montero (2018), concluye que a pesar de los diversos cambios en la legislación penal, e incluso el cambio en el código procesal penal que entró en vigencia hace muchos años atrás, los juristas no lograron investigar de manera adecuada a las personas en

libertad, por ello muchas veces se ve como han sido encarcelados muchas personas, sin que hubiera un análisis adecuado de los presupuestos para la aplicación de dicha medida, en consecuencia creando altos estándares de prisioneros en las diversas cárceles asignadas para recibir a los presos. También Paja (2015), señala que, en nuestro ordenamiento jurídico, se incorpora, teniendo en consideración a la viabilidad constitucional, legal y jurisprudencial para verificar el surgimiento del peligro de reiteración delictiva, es decir un peligro que surge en reiteradas veces, además de ser considerado un presupuesto material, para que mediante una audiencia el Juez, a pedido del fiscal de la investigación preparatoria, dicte un mandato de prisión preventiva al investigado, o presunto autor del delito, en conformidad a la protección que le corresponde a la sociedad frente a estos peligros delincuenciales, a fin de salvaguardar su integridad, salud, o sucesos que amenacen vulnerar la seguridad ciudadana, así mismo se cumpla el evitar el peligro de reiteración delictiva, ya que es una de las finalidades de las medidas y coerción procesal.

Además, Serrano (2015), indica que los Magistrados, y abogados juristas indican que no es algo constitucional, la acción de privar el derecho de la libertad a los investigados mediante el requerimiento de prisión preventiva, porque se restringe de su libertad, antes de que exista una sentencia firme. Por otra parte, Ríos (2017), refiere que, a lo largo del tiempo se han desarrollado diversas medidas personales para el investigado, sin embargo, cuando nos referimos a la prisión preventiva se genera un mayor debate en la legislación penal nacional e internacional, debido a que es una medida que se aplica dentro del proceso penal, sin haberse dictado una sentencia, donde supuestamente el procesado se encuentra protegido por su presunción de inocencia. Además, Pacheco (2018), sostiene que la prisión preventiva, es una medida que tiene como finalidad asegurar el fin del proceso penal, al siendo una medida cautelar de ultima ratio, debería ser aplicada como tal, sin embargo, no se aplica en la legislación como ultima ratio, por el contrario, es aplicada de forma privilegiada, a pesar que existen otras medidas cautelares a aplicar cuando surge un caso de un presunto delito, de esta manera, la prisión preventiva pierde su esencia y naturaleza. También, Garay (2018), Concluye que existen factores económicos, sociales y familiares que influyen en la responsabilidad que tienen los jueces, al momento de dictar prisión preventiva, que priva de la libertad al investigado, causándole un daño a su libertad en consecuencia.

En relación al marco teórico, revisando la literatura, tenemos a Arce (2009), quien señala que las medidas coercitivas son medidas dadas al investigado con autorización del Juez, con la finalidad de restringir varios derechos fundamentales, entre ellos el fundamental derecho de la libertad de una persona humana, esta medida es íntegramente reconocida por la Constitución Política del Estado y los diversos tratados Internacionales, lo cual va a ser una medida diferente a otras medidas, por ejemplo las penas y las medidas de seguridad, por consiguiente, se caracteriza por ser una medida provisional, coactiva, lo anterior se refiere que la entidad pública podrá hacer uso de sus funciones poniendo fuerza pública, incluso con amenaza. Así mismo Ortells (2016), respecto al proceso cautelar, señala que es el acto procesal que da respuesta a una necesidad creada por el propio proceso en el ejercicio de la administración de justicia y del derecho de acción. También alega que el proceso cautelar se define como el instrumento o remedio regulado por el derecho, orientado a evitar un riesgo, en el ámbito jurídico del imputado, con el objetivo de que surta efecto, por ello, este proceso se encuentra contenido del Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, siendo que uno de los elementos importantes es el derecho que se cumpla con lo establecido en el fallo.

Por otra parte, Gutiérrez (2016), sostiene que la medida cautelar que es la prisión preventiva, es una medida temporal, lo que conlleva que el acusado sea sometido a un momento de privación de su libertad, aunque se presume que todo imputado es inocente mientras no se demuestre su culpa, teniendo un interés social en el seguimiento del delito, siendo evidente que la libertad personal como derecho fundamental reconocido en la carta Magna no es completamente absoluto, peor aun cuando los intereses sociales predominantes así lo requieran. Así mismo Jara (2013) menciona que la prisión preventiva es una medida de precaución en la que se priva de la libertad de manera legal, siendo que esta medida busca proteger la investigación del hecho delictivo con el que sigue al acusado, siendo su juzgamiento de manera eventual, hasta el cumplimiento de su pena.

En cuanto a los elementos materiales respecto de la prisión preventiva, advirtiéndose que es una medida de coerción de carácter personal, que en muchos procesos resulta cuestionable, toda vez que no valora ni se toma en cuenta los principios universales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo un principio vector discutido y cuestionado como lo es la presunción de inocencia. Es por ello que Talavera (2010),

manifiesta que la detención o prisión preventiva regulada en el CPP en su artículo 268, la cual contiene una serie de elementos y/o presupuestos siendo que este determina que para la aplicación de la prisión preventiva, se evalúa la acreditación o existencia de elementos de convicción respecto de la realización del hecho punible, y además la actitud o pertinencia del inculpado, si pertenece a una organización criminal delictiva o en su defecto que se haya reincorporado a la misma. Por otro lado, Asencio (2012), señala que la libertad personal puede ser restringida en el proceso penal, en la etapa investigadora, siempre y cuando se verifiquen las condiciones que la Ley establece, en cada tipo de limitación, refiere a las medidas cautelares personales por ser de carácter personal, como las resoluciones, mediante la cual se limita la libertad de movimientos con la finalidad de asegurar su presencia en el juicio oral y sentencia según sea el caso.

Además, Chávez (2013), advierte que lo tipificado en el inciso 1 del artículo 268 del NCPP, menciona los elementos o presupuestos que debe considerar el Magistrado y/o Juez para determinar si merece la aplicación de la prisión preventiva, siendo que lo que debe evaluar o considerar es: La sustentación o acreditación de que existan graves elementos probatorios de convicción y la relación del delito con el inculpado o imputado que se identifique como autor o participe del hecho delictivo. Por otro lado, Sánchez (2011), fundamenta que el juez de la investigación preparatoria se ve en la necesidad de analizar y evaluar elementos probatorios o de convicción, siendo pruebas que acompaña lo solicitado por el fiscal, siendo de gran relevancia en el proceso, que será viable para fundamentar la medida a imponer, además, en el caso que haya demasiados elementos probatorios que acrediten la perpetración del delito, pero que no se relacione con el acusado, no habría la posibilidad de aplicar dicha medida, toda vez que para su determinación se requiere que se cumpla con todos los presupuestos a cabalidad que respalden dicha medida provisional.

También Sánchez (2011), fundamenta que la prisión preventiva, no solo se trata de un prejuizgamiento, siendo que el juez que lo dictamina no es el mismo que impondrá la sentencia definitiva, dejando en claro que la pena interpuesta será de manera temporal y útil para dictarse merece o no prisión preventiva, siendo esta efecto de lo predeterminado en el Código Penal y las penas que merece cada delito, advirtiendo que el juez debe tener en consideración la pena a imponerse tomando como la base los elementos de convicción existente al momento de juzgar. Además, Vargas (2017), refiere que dichos presupuestos

se pueden dar manera personal o conjunta, teniendo claro que para acreditar el peligro procesal es suficiente identificar que se incurra en algunos de los presupuestos establecidos en el Código Procesal, desechando las sospechas o presunciones, toda vez que sin la presencia de los requisitos mencionado anteriormente no existiría el peligro procesal, siendo que no se podría dictar prisión preventiva.

Por otro lado Ríos (2017), tomando en cuenta el antecedente del imputado y otras circunstancias de cada caso en particular, indica que se puede apreciar que el acusado o imputado buscará la manera de evadir el accionar de la justicia incurriendo en el peligro de fuga obstaculizando así la realidad de los hechos encuadrándose en el peligro de obstaculización, siendo estos dos manifestaciones y requisitos indispensables para que exista peligro procesal, siendo que sin la presencia de estos, podría evitar la correcta aplicación de la medida de coerción personal. Por consiguiente, Sánchez (2011), refiriéndose al peligro de fuga, afirma que está comprendido dentro del peligro procesal, respecto al peligro de fuga, existen elementos indispensables que el Nuevo Código Procesal menciona en el artículo 269, estableciendo las siguientes bases determinar si existe dicho peligro: a) El arraigo domiciliario, familiar y laboral, b) Que tan grave resulta la pena a imponer como consecuencia del proceso, c) El daño provocado o la inexistencia de voluntad del imputado para reparar el daño, y d) La conducta procesal del imputado y la actitud de su persona para colaborar con la justicia durante del desarrollo del proceso.

Los principios son de gran importancia, al momento de solicitar que se aplique la prisión preventiva como medida de coerción, con el fin de proteger los derechos del investigados y no se vea vulnerado en sus derechos en un ningún momento del proceso, siendo que aplicación sea llevada con el debido proceso, Palacios (2018), menciona como primer principio al Principio de Legalidad, con este principio, señala que el artículo 253 del NCPP dispone que todos los derechos básicos deben reconocidos por la constitución y los tratados de derechos fundamentales ratificados por el territorio nacional, solo estarán limitados en el marco de proceso penal, si la ley lo considera, con las garantías mínimas que la ley establece. Por lo que se debe entender que una medida cautelar que restringe derechos humanos de las personas no surtirá efectos sin que la carta magna y la Ley procesal lo permita de manera adecuada con arreglo a ley, siempre en cuando se haya iniciado un proceso de investigación en su contra, excepto el caso de flagrancia delictiva.

Además Cusi (2017), sostiene que la carta magna es la máxima norma que prevalece sobre toda norma con rango de ley, que forma nuestro ordenamiento jurídico, asimismo los tratados internacionales y los derechos humanos vigentes deben cumplirse de forma obligatoria de acuerdo al caso, siendo ello así, el proceso penal no es más que un derecho constitucional, siendo ese contexto debemos decir que el proceso penal busca garantizar las libertades el derecho de todos los justiciables, siendo este enlace de ideas para limitarse o restringirse derechos fundamentales, se da de manera excepcional y solo da a lugar cuando dicho acto buscar garantizar otro derechos en el momento del juicio, cobrando un peso mayor en el proceso. También, Alonso (2019), sostiene que los derechos fundamentales que limita no restringen son viables toda vez que ellos no son absolutos o ilimitados, asimismo estos derechos relacionados por otros derechos de igual valor. La imposición de una sanción a hechos delictivos es importancia para la sociedad y el estado de derecho, siendo que la ley debe buscar un equilibrio, sin menoscabar la protección de los derechos de otras personas, dándose de una forma excepcional la aplicación de las medidas limitativas de derechos.

Por otro lado, Sandoval (2004), en cuanto al principio proporcionalidad y debida motivación, señala que la prohibición o limitación de un derecho fundamental entiende una aprobación legal, siendo que se da respecto al principio de proporcionalidad, siendo que esta medida requiere obligatoriamente elementos de convicción necesarios para el proceso penal (artículo inciso 2 del NCPP). Así mismo Palacios (2018), refiere que el operador de justicia está en la obligación de establecer un juicio de proporcionalidad cuando se aplica una medida cautelar o coercitiva, entendiéndose que se deberá valorar correctamente si es necesario o indispensable limitar un derecho fundamental con el objetivo de buscar los fines públicos en el desarrollo del proceso penal, siendo que todo ello conlleva que se emitirá una resolución que promueve y concede la aplicación de la medida cautelar o coercitiva, siendo que todo fundamento debe estar debidamente motivado conteniendo elementos de convicción suficientes y razonables que respalde todo proceso penal.

Por otro lado, el Principio de Necesidad, manifiesta que una medida cautelar que restringe derechos fundamentos en el proceso, pues solo se impondrá según la necesidad que el caso lo amerite, por consiguiente Pacheco (2000), señala que el principio de necesidad establece que el juez tiene la facultad de elegir el tipo de medida de cautelar de

carácter personal o real, siendo que la medida a imponer debe ser proporcional, entiéndase que no debe ser no tan riguroso pero si debe surtir efectos con el objetivo del proceso penal. También Adato (2001), explica que las medidas cautelares o coercitivas, deberán imponerse a circunstancias que en verdad lo ameriten, adecuándose a la investigación en curso, no debe sobrepasar más allá de los límites necesarios y como último recurso para el cumplimiento de la investigación, por ello la excepcionalidad se transforma en la primera vertiente básico que rige la Institución Cautelar respetando la jerarquía constitucional y supranacional.

Por otro lado, Talavera (2013), explica que la norma permite la aceptación de algunas medidas cautelares dentro del desarrollo de las diligencias en la investigación con la finalidad que los elementos incriminatorios conserven el estado material respecto de los hechos que provocaron la comisión del delito. Las medidas coercitivas toman fuerza cuando proviene de un requerimiento fiscal o policial que pone a la persona en una posición de investigado, la cual acarrea como efecto determinadas cargas que posteriormente pueden llevar a la determinación de una medida.

También Cusi (2017), sostiene que de esta forma la comisión de un hecho delictivo debe comprobarse dentro de la investigación preliminar o preparatoria la cual tiene una relevancia jurídico penal, tomando en cuenta los derechos del imputado que es la presunción de inocencia y el derecho de defensa, en la que se emitirá una medida temporal tomando en cuenta los criterios y derechos establecidos en la norma según sea el caso, atendiendo a las atenuantes y características de cada hecho delictivo. Así mismo Palacios (2018), en referencia al Principio de Temporalidad, entiende que las medidas cautelares o coercitivas, se darán de manera temporal, siendo que solo durara el tiempo necesario para asegurar sus efectos dentro del proceso penal en la que se emitirá una sentencia definitiva, teniendo como modelo procesal lo dispuesto en la ley estableciendo límites temporales como lo es la detención policial y arresto ciudadano por 48 horas y en el caso de la imposición de la prisión preventiva será de 9 meses y de ser el caso complejo seria 18 meses según el caso teniendo en cuenta los atenuantes o agravantes.

Además, Sandoval (2004), respecto al principio de instrumentalidad, refiere que las medidas cautelares o coercitivas ayudan a combatir a que siga causando daño y busca que no haya ocultamiento de bienes o haya entorpecimiento en la actividad probatoria y en la

indagación de la verdad de los hechos, así evitar que siga causando daño hasta que dicte una resolución final, la cual pondrá fin al proceso teniendo en cuenta el artículo 253 del CPP. Por consiguiente Sandoval (2004), teniendo en cuenta lo anterior, refiere el fundamento predeterminado por la jurisprudencia nacional, donde se manifiesta lo siguiente: La aplicación de las medidas coercitivas tiene como fin , que el proceso penal sea asegurado y llevado a cabalidad en presencia del imputado para que pueda responder con la pena impuesto en su contra, estableciéndose dentro de los lineamientos del marco de la proporcionalidad y razonabilidad, respetando el proceso judicial, temporalidad, reformatividad de la medida de coerción personal, dicho esto se encuentra recaído en el Expediente 2008-00350-14- 2801- JR-PE-1 (Juzgado De La Investigación Preparatoria Moquegua).

También Talavera (2013), refiere a la palabra presunción, del principio de presunción de inocencia, que se desprende del latín *présomption*, derivado del término *praesumptionis* que se entiende como una idea anterior a toda experiencia y el termino inocencia proviene del latín *innocens*, que significa virtuoso, calidad del alma que no ha cometido pecado. Además Puccio (2013) sostiene que la medida provisional engloba una prohibición de la libertad de una persona sujeto de derecho en consecuencia de un fallo mediante una sentencia judicial (resolución), interpuesta, sin embargo debe evaluarse y/o considerarse que la aplicación de la prisión se da forma excepcional y no puede verse desnaturalizado, por otro lado su aplicación resulta necesario con el objetivo de resguardar el mejor desarrollo de un proceso y proteger todo los elementos que impidan la obstaculización de la verdad.

Por otra parte, Peña (2011) sostiene que toda persona que se le atribuye un delito, debe ser considerado inocente, aunque se encuentre recluido o privado de su libertad en la cárcel como consecuencia del requerimiento de la prisión preventiva, siendo que toda persona es considerada inocente y debe ser tratado de esa manera, en tanto no se hayan acreditado su responsabilidad a través una sentencia firme. Así mismo, respecto Derecho a la presunción de inocencia, en referencia a la Sentencia TC, 2915-2004, fundamento 12, el derecho a la presunción de inocencia, es un derecho fundamental protegido por el derecho, por lo tanto, la presunción *iuris tatum*, comprende que todo sujeto procesado es inocente mientras no se demuestra su culpabilidad y que no exista un medio probatorio que

demuestre lo contrario. Siendo que este derecho tiene todo imputado que haya cometido un hecho delictivo, teniendo la calidad de sospecho el acusado durante todo el desarrollo del proceso, mientras no se emita una sentencia final.

Además, Vásquez (2016), sostiene que el principio de *In dubio pro reo* está relacionado a la presunción de inocencia, por lo tanto, el magistrado o juez debe beneficiar al procesado cuando no pueda establecer una clara interpretación o tener certeza de la culpabilidad del mismo, vale decir que el juez no tiene la certeza ni la seguridad de la responsabilidad del acusado, por lo tanto, debe absolverlo.

Así mismo Talavera (2017), refiriéndose al derecho a la prueba y legitimidad de la prueba en la prisión preventiva, manifiesta que lo importante y relevante en un proceso judicial, se basa en encuadrar la realización de diversos hechos delictivos, que están relacionado con delitos regulados en la ley, que tiene efectos jurídicos y merece la imposición de una pena como resultado de accionar, por lo consiguiente se concluye que lo relevante en el proceso es la correcta aplicación del derecho. Por consiguiente, Talavera (2017), refiriéndose al derecho de prueba, señala que es un derecho subjetivo, de carácter procesal y rango fundamental, sin perjuicio que posteriormente se hable de un derecho de estructura legal, siendo que en la jurisprudencia se presenta como un instrumento respecto del derecho defensa. Se confirma que la presunción de inocencia obliga que las pruebas se realicen respetando todas las garantías del proceso y se adquieran lícitamente. También Echandía (2002), refiere que el principio de legitimidad de la prueba obliga a que se empleen elementos probatorios moralmente lícitos.

Por otro lado Arción (2013), refiriéndose al robo agravado, señala que la persona que se apodera de un bien mueble sin su voluntad o derecho alguno comete el delito de robo, asimismo se debe entender por bien mueble la cosa que circula de un lugar a otro, sin importar el tamaño, color o forma, siendo que dicho bien no se encuentre pegado al suelo, pudiendo ser objetos grandes o pequeños y que tenga un valor económico, agregando que dichos bienes susceptibles de ser robados pueden ser anillos, relojes, billeteras, carteras mochilas y otros. Por consiguiente, Arción (2013), refiriéndose al robo agravado, afirma que el bien jurídico tutelado en este delito agravado, es un hecho delictivo pluriofensivo, en ese sentido dicho acto lesiona varios bienes, entre las cuales tenemos, delito contra el patrimonio, contra la vida y la salud, y por otro lado se prohíbe la libertad de la persona cuando haya de por medio amenaza.

Así mismo Castellano y Castellano (2012), manifestaron que “La agresión y el maltrato, es el resultado de los efectos de una comunidad agresiva que han surgido a partir de años anteriores de diferentes modalidades, por lo que así mismo han aparecido disciplinas referentes al ámbito psicológico, genético, sociológico, además en la criminología, neurología y filosofía entre otras materias. Existiendo las distintas materias o disciplinas, de acuerdo al método que sea más beneficioso, la interpretación y conocimiento de sus inicios u orígenes con el objetivo de que la aclaración brinde remedios para un dominio o erradicación de la agresión y violencia, en un ambiente en la cual su aparición ha sido comprendida como el renacimiento de un estado de la naturaleza armónico e irrazonable en el estado de las sociedades modernas y razonables”.

En este estudio desde la legislación comparada, Ezequial (2015), en su jurisdicción Argentina, establece una estructura respecto a la Prisión Preventiva como un problema extrajudicial, relacionando al tema de la seguridad en las excesivas excarcelaciones, el ámbito político establece una vinculación con el Poder Judicial en sede penal, en concordancia con la policía y los medios de comunicación. Entendiéndose que es importante señalar que en muchos eventos se manifiestan junto a declaraciones que emiten los actores judiciales al caso en concreto. Así mismo Ezequial (2015), respecto a la prisión preventiva, advierte la existencia de la crisis política y esta puede desatar irregularidades en la dependencia policial, abriendo la incertidumbre de que la seguridad pública sea vea envuelto en una discusión, teniendo en cuenta la discusión, el Órgano Judicial donde se desarrolla la prisión preventiva, fue tomada como una institución para transformar.

También Ovejero (2016), en su jurisdicción Española, define a la presunción de inocencia como un derecho fundamental siendo una garantía regulada en la CE, artículo 24 inciso 2, la cual era de aplicación en el proceso penal, teniendo su base legal en la constitución, e incluso desde épocas antiguas se analizaban el vínculo que existía entre la presunción de inocencia con la prueba de cargo, o prueba indiciaria, respetando las restricciones de la prisión preventiva, con el hecho de la carga de la prueba tomando en cuenta las teorías del árbol envenenado, siendo de gran relevancia para la etapa de juzgamiento así mismo tomando en consideración el principio de inmediación, con los investigados y testigos, y la valoración de los elementos de convicción recabado por el juez. Concluyendo, que la presunción de inocencia es una garantía constitucional ofrecida por la

presunción iuris tantum, que solo puede verse suprimida por una prueba mayor de rango constitucional valida y recogido en el proceso cumpliendo con todas las garantías que reconoce la Ley.

Además, Pérez (2014), en el marco legal francés al igual que la legislación española, sostiene que se entrelazan o vinculan constitucionalmente el derecho de la libertad de prensa y la presunción de inocencia, por lo que se determinan ciertas garantías legales que desarrolla la constitución, los cuales son a fin de asegurar el respeto del secreto de la instrucción. Por otro lado, el fundamento jurídico respecto del reconocimiento y la presunción de inocencia en el marco normativo de Francia, agregando que los criterios para su explicación reconocen una doble perspectiva siendo el derecho procesal o extraprocesal, de tal forma que una acción legislativa se disponga a estas consideraciones: Protección, protección justiciable y la protección del sistema democrático realizado en el pluralismo y en especial a la protección del derecho de la libertad.

Por consiguiente, este estudio desde la legislación comparada, Salcedo (2018), en su jurisdicción mexicana, respecto a la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, citando a la Constitución Política Mexicana, sostiene que en el marco legal Mexicano se ha realizado muchas modificaciones a la institución de la prisión preventiva, en la cual se aplicara una pena privativa de la libertad a los hechos delictivos en lo que se vea un riesgo eminente en la perpetración de un delito, estableciendo que las personas integrantes de la delincuencia organizadas se encuentren reclusas en centro especiales, en la cual se le suprimiría las comunicaciones de acuerdo a la tipificación del delito .

Análisis Jurisprudencial. - Casación de Moquegua 626-2013: La Casación de Moquegua 626-2013, trata acerca del proceso que se sigue contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani, por la presunta comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio Calificado, tipificado en el artículo 108 inciso 3 del Código Penal, en agravio de Mirian Erika Aucantico López. Siendo que en primer lugar que no hubo una debida motivación en la resolución, siendo no sustenta ni acredita lo dispuesto en ella. Segundo, que la sala superior no debió revocar lo dispuesto por el A quo, sino debió anularla y ordenar que haga una nueva audiencia para determinar si procedía la medida de prisión preventiva. Siendo así que en primera instancia se declaró fundando dicha medida, a pesar de que encontrarse debidamente fundamentada, siendo que la defensa no sabía cómo llevar a cabo una adecuada defensa en concreto.

De acuerdo a los argumentos de la Prisión Preventiva teniendo como base el fundamento 24, en el presente caso, el Fiscal solicitó el requerimiento de prisión preventiva, siendo que este, debe cumplir con acreditar la existencia de los tres presupuestos materiales regulado en el artículo 268 del Código Procesal, asimismo en este caso debe advertirse que se debe pronunciar sobre la proporcionalidad de la medida y su duración, siendo que en el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, la defensa pueda pronunciarse respecto de cada punto indicado en la ley.

Además, de acuerdo al desarrollo de la estructura del Debate desde el punto 17 al 24 de la Casación N° 626-2013, en concordancia de la prisión preventiva, en la audiencia se deberá debatir respecto a cinco puntos, siendo que durante el desarrollo el primer punto a tratar, versará sobre la existencia fundados y graves elementos de convicción relacionado con el imputado como autor o partícipe, como segundo punto el pronóstico de la pena, como tercer punto peligro procesal que contiene dos elementos, siendo el peligro de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, agregando dos puntos más a debatir en la audiencia que generará un precedente vinculante para resolver delitos futuros que contengan similares características, determinando como cuarto punto la proporcionalidad de la medida y como quinto punto la duración de la medida, siendo los cinco puntos más importantes a debatir durante todo el proceso y verificar si cumple con los requisitos mencionados para ser si configura aplicar la medida coercitiva de naturaleza personal como lo es de la prisión preventiva.

Sala Penal Transitoria de Arequipa Casación N° 631-2015: De acuerdo al análisis de la Casación N° 631-2015 realizado en Arequipa con fecha 21 de diciembre del 2015, fallo resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, determinando puntos concretos para evaluar la Prisión Preventiva, teniendo el Juez en cuenta tres requisitos que están relacionado con el peligro de fuga siendo los siguientes elementos: 1) La posesión, 2) Arraigo familiar, y 3) Arraigo Laboral. Siendo que de acreditarse cualquiera de estos requisitos, se desestimarían haya peligro de fuga del imputado. Así mismo, debe tener en cuenta como criterio importante la moralidad del imputado lo que significa que no tenga antecedentes, siendo un elemento vinculado con el peligro de fuga. Además de ello se puede advertir que, aunque la pena sea relevante, si no se logra acreditar los elementos probatorios respecto al peligro procesal, no se podrá dictar el requerimiento de una medida cautelar o

coerción de carácter personal de prisión preventiva. Por otro lado, se debe agregar no se podría determinar el peligro de fuga en base a la condición del imputado siendo una extranjera, toda vez que dicho acción sería discriminatorio por razón de nacionalidad.

Así mismo, se identificó ciertos argumentos amparados en el derecho respecto de los arraigos como criterios relevantes para determinar si existe peligro de fuga, estos son: No puede tomarse como un elemento relevante para acreditar el peligro de fuga que el imputado realice muchos o pocos viajes, siendo que los criterios relevantes para evidenciar dicho peligro procesal, sería que el encausado no cumpla con los arraigos establecidos en la Ley siendo el familiar, laboral, asimismo tenga conexiones o contactos con las personas del extranjero que puedan ayudar a fugarse del país, que se verifique los elementos con los elementos provenientes de la esencia del hecho y gravedad de la pena, importe económico a pagar de la pena, siendo que ninguna de ellas deberían ser analizadas de manera independiente, sino que está vinculado con otras características o criterios como: (i) conducta del imputado en el transcurso del proceso o en uno anterior, teniendo en cuenta la aptitud de querer contribuir con el proceso penal, (ii) personalidad del imputado y/o (iii) los vínculos privados (relaciones familiares y laborales) Llobet Rodríguez, Javier: obra citada, páginas trescientos ochenta y ocho guiones trescientos ochenta y nueve]. (Fundamento de derecho Séptimo).

Teniéndose en cuenta que la prisión preventiva se da de forma excepcional, ante la eventual circunstancia de tener que esperar el juzgamiento o juicio en una situación de libertad, y en el caso que se restrinja la libertad manifestándose en algunas de sus formas, siendo que no prive la libertad ambulatoria del imputado. En conclusión, la restricción de la libertad personal será la única excepción; y solo se podrá tomar esa medida en el extremo que no haya otra forma o medida menos gravosa respecto del derecho de libertad, siendo que se debe llegar con el objeto del proceso legal.

Asimismo se debe tener en cuenta que en materia de derechos fundamentales la legalidad será analizada o explicada de manera favorable para la eficacia de los derechos, siendo que se advierte la existencia de los siguientes elementos: (i) Excepcionalidad, siendo que prisión preventiva jamás puede transformarse en una regla general, y no puede darse si hay otra medida que permita satisfacer con los fines del proceso que lo justifique (ii) subsidiaridad, este elemento exige al operador de justicia a analizar u examinar,

que cumpla con los elementos (presupuestos) materiales que lo justifican, debiendo aplicar otra medida menos dañosa que no importe la libertad del imputado, satisfaciendo el objeto de la prisión preventiva, siendo que este no vulnere el derecho fundamental de la libertad [Gimeno Sendra, Gimeno: Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, dos mil cuatro, página quinientos treinta y siete]. (Fundamento de derecho Octavo). Teniendo la resolución al hacer mención de las pautas generales sin observación de las concretas razones para un aumento (y/o incremento) del plazo de privación de la libertad dentro del proceso, comprende de una motivación irrazonable, que no puede ratificarse. No habiendo otra manera que casar el auto de vista. (Fundamento de derecho Decimo).

Fallo de la Casación Numero 564 – 2016 en Loreto por la Sala Penal Transitoria: La Corte Suprema fija como doctrina jurisprudencial el fundamento de derecho número 5, siendo que la materia de análisis versa sobre la importancia de la apariencia del delito, estableciendo un criterio que tendrán que acatar los magistrados al momento de emitir un fallo, en el momento examinar la interposición de la prisión preventiva. Determinando que dicha medida coercitiva debe contener como uno de los presupuestos la apariencia del delito. Siendo un criterio importante que no debe ser visto desde un aspecto sustantivo, es decir que dicho delito se encuentre tipificado en la norma penal y que sea encuadrado en el ordenamiento jurídico de acuerdo a los criterios objetivos y subjetivos, así mismo se verifique también el peligro procesal evidenciándose la acreditación de fundados y graves hechos materiales de convicción que se evidencie la existencia de un elevado nivel de posibilidad de la ejecución de un delito.

Así mismo, teniendo en cuenta estas consideraciones, se debe realizar un análisis de los hechos haciendo un contraste con la teoría de imputación objetiva y además subjetiva, en este sentido se someterá a una evaluación si se concretó la comisión de un hecho punible que evidencia el delito encuadrado en la ley penal. Realizando esta investigación se pudo obtener la Casación 564-2016 emitida en la ciudad de Loreto, de fecha 12/11/2019, siendo que en la emisión del fallo en la parte resolutive se determinó como jurisprudencia vinculante el quinto fundamento de derecho.

Por consiguiente, el caso en concreto se determinó de la siguiente manera: Concedido el recurso de casación por inobservancia de la doctrina jurisprudencial solicitado por el Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal en la ciudad de Loreto, contra

el auto de vista 21/03/2016 en fojas 02, siendo que emitió un fallo, resolviendo: a) Fundado el recurso de apelación requerido por la defensa de Wagner N. Núñez Álvarez, b) La Resolución N° 2 se revocó el día 05/03/2016, que resolvió fundado la prisión preventiva siendo que con posterioridad se cambió dicho fallo, declarando infundado la prisión preventiva requerida contra el imputado por parte de la Fiscalía, por la presunto delito cometido de Tráfico Ilícito de drogas en agravio del Estado, y por ultimo como punto c) Se dispuso la aplicación de una medida coercitiva personal de comparecencia restringida. Además, el órgano Supremo examinando habiendo realizado un riguroso análisis de los actuados, manifiesta, que órgano superior al evaluar los presupuestos materiales para requerir prisión preventiva, no siguió ni cumplió con lo determinado en la sentencia Casatoria de Moquegua 626-2013, de fecha 27 de febrero del 2016, en la que manifiesta que para dictar prisión preventiva.

Como conclusión se advierte que en una nueva resolución en la que se pronuncie otro Colegio u órgano jurisdiccional, analizará los hechos materia de investigación, siendo que el imputado no se vea vulnerado en el derecho de defensa, recabando los hechos recibidos por el imputado en concordancia con otros elementos de cargo y de convicción que lo acrediten. Siendo que esta forma, el magistrado o juzgador podrá tomar conocimiento con certeza de la realidad de los hechos, verificando si existe la necesidad de aplicar una medida coercitiva que prive la libertad de una persona. Teniendo claro que solo la libertad puede ser privada de manera excepcional, siendo la regla general que todos los ciudadanos lleven un proceso en libertad o con comparecencia simple.

Justificación del estudio. - La justificación de un estudio se define como el elemento que nos describirá los motivos que se van a ratificar o aprobar la realización de la presentación investigación. En concreto se entiende que la justificación se describe en el primer capítulo, integrando una parte del problema de investigación, además al crear una justificación de estudio se tiene que tener en cuenta cual es el motivo o fin del estudio al realizarse la investigación, así mismo aclara a quien se beneficia social o jurídicamente, justificando el porqué de la indagación o investigación y los beneficios que tiene cada teoría que justifique el asunto, teniendo en cuenta la parte metodológica y práctica. Por consiguiente, podemos ver que, según Otiniano y Benites (2014), la Justificación se divide en Teórica, Metodológica y Práctica.

Justificación Teórica. - Este estudio desde el punto de vista teórico, se justifica, ya que se profundizará en referencia a una teoría que explique acerca de la medida cautelar coercitiva personal, la prisión preventiva, definiendo de esta forma así los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado. Además, que lineamientos que se debe considerar para mejorar la aplicación de la prisión preventiva en el delito de robo agravado, en el Distrito Judicial de Lima Norte, necesarios para determinar si el requerimiento de prisión preventiva llega a afectar los derechos primordiales de los investigados, en específico el derecho fundamental de la libertad. Así mismo, Valdemarra (2002), sostiene que la justificación teórica, refiere a la preocupación que surge en el investigador por profundizar en diversos enfoques teóricos que explica el tema investigado, y así complementar la teoría relacionada al tema.

Justificación Metodológica. - Este estudio a partir de la perspectiva metodológica, se justifica debido a que en la presente investigación se aplicará una adecuada metodología, así como los instrumentos, técnicas, y metodología. En esta investigación se aplicará la guía de preguntas de entrevista, ficha de análisis de fuente documental y la ficha de análisis de las normas nacionales, con el objetivo de obtener datos relacionados de la medida cautelar coercitiva de naturaleza personal, la prisión preventiva, explicando así en que consiste dicha medida cautelar, que presupuestos solicita el Juez para autorizarlo, duración, plazos, y así poder verificar los efectos que surgen cuando se solicita el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado, además los lineamientos que se debe considerar para mejorar la aplicación de la prisión preventiva, con la finalidad de corroborar si los derechos fundamentales de los investigados podrían ser afectados. en específico el derecho fundamental de la libertad. Así mismo Valderrama (2002), respecto a la justificación metodológica, señala que es aquella justificación empleada en la investigación, así como técnicas instrumentos, que servirán para obtener resultados y aportar datos necesarios al estudio datos, así mismo servirá para la aplicación posterior de otros investigadores.

Justificación Práctica. - Este estudio desde la perspectiva práctica, se justifica en cuanto a la ejecución de la investigación, que determinará la puesta en práctica de los elementos teóricos propios elaborados a partir de las dimensiones como efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de

Lima Norte, en base a la información obtenida de los instrumentos aplicados y análisis de casos de prisión preventiva en robo agravado. Además, con la aplicación de los instrumentos, de recolección de datos, se obtendrá la información que coadyuvará a determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva, en los imputados por el supuesto delito de robo agravado, además se verificará si la aplicación de la prisión preventiva es dada de acuerdo a los presupuestos que establece el Código procesal Penal en el artículo N° 268, según el sistema penal peruano, que permitirán la mejora de la gestión del requerimiento de la medida de prisión preventiva, es decir, un buen análisis del caso, de acuerdo a los presupuestos que establece el Código procesal Penal en el artículo N° 268, que permitirán la mejora de la gestión del requerimiento de la medida de prisión preventiva. Así mismo, Valdemarra (2002), señala que la justificación práctica se justifica en la medida que el investigador busca obtener un grado académico mayor, en cuanto a su formación personal, así mismo, refiriéndose al tema analizado, se realiza el estudio con la finalidad de dar un aporte a las demás personas, o contribuir a la solución de inconvenientes concretos que están afectando a organizaciones empresariales, públicas o privadas.

Objetivo General y específicos. - En relación a los objetivos de este estudio, se ha formulado un objetivo general: “Determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte”, Así mismo, se tienen cuatro objetivos específicos: a) Determinar en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte, b) Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulneran el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte. c) Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte y d) Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

II. Método

2.1 Tipo y diseño de la investigación

Enfoque de la investigación

La presente investigación aplica el enfoque cualitativo, porque tiene por finalidad la descripción de las cualidades de la problemática general, mediante el empleo de la observación, siendo adecuado que como investigador aplique lo anteriormente mencionado. Así mismo, Hernández (2014), sostiene que la investigación cualitativa, busca investigar a los individuos involucrados en la indagación del caso, materia de investigación, para poder realizar el análisis respectivo de cada individuo y así tratar de encontrar una solución. También Pierre (2004), explica que la investigación cualitativa, es un tipo de análisis donde se genera y examina los datos descriptivos, refiriéndose a las palabras escritas o dichas, y los comportamientos desenvueltos por las personas, los cuales serán observados por el investigador.

Tipo de estudio

El tipo de estudio es el básico, el cual orienta a la investigación a la búsqueda de nuevos conocimientos, y a la creación de un cuerpo de conocimiento teórico nuevo. Así mismo, la investigación de estudio básico, tendrá como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos de estudio, por ende, la investigación no tiene un fin práctico que sea específico e inmediato.

Diseño de la investigación

La teoría fundamentada se trata de un estudio que genera teorías que explican un fenómeno de una realidad social de un proceso, es por ello que el presente estudio investigación tiene como diseño de la investigación la teoría fundamentada. Así mismo Hernández (2004), sostiene que la teoría fundamentada son aquellas categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos respectivos, así mismo, es la categoría que explica el proceso o fenómeno de investigación.

2.2 Escenario de estudio

El escenario en la que se desarrolla el presente trabajo de investigación es el Distrito Judicial de Lima Norte, sin embargo, las fuentes de información y los entrevistados no necesariamente son los que radiquen o laboren en dicho lugar, así como las fuentes documentales son obtenidas de las principales bibliotecas de la capital y los importantes repositorios a nivel nacional e internacional.

2.3 Participantes

En la presente investigación, en primer lugar, se tiene como participante a los fiscales de las Fiscalías Penales de la Corte Superior de Justicia, así mismo a los operadores de justicia que desempeñan su labor en dicho centro laboral, por consiguiente, las autoridades de justicia de los Juzgado Penales del Distrito Judicial de Lima Norte. Por consiguiente, de acuerdo a este estudio, Otiniano y Benites (2014), definen que la caracterización de sujetos realizada en la investigación, radica fundamentalmente en la descripción que se les realiza a los participantes.

Población

- Operadores de justicia de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lima Norte.
- Casaciones que tratan sobre la prisión preventiva a analizar

Respecto al concepto de Población de una investigación científica, Hernández (2004), sostiene que el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población (de un grupo pequeño a uno mayor).

Caracterización de sujetos:

Sujeto	Profesión y grado académico	Perfil profesional	Cargo Actual
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Especialista en materia penal- delitos	Fiscal Provincial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Especialista en materia penal- delitos	Fiscal Provincial de la Corte
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	Especialista en materia penal- delitos	Fiscal Provincial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Especialista en materia penal- delitos	Juez Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Verónica Torres Cuadros	Juez	Especialista en materia penal- delitos	Juez Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de

			Justicia de Lima Norte
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Especialista en materia penal- delitos	Juez Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	Especialista en materia penal- delitos	Abogado Penal
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	Especialista en materia penal- delitos	Abogado Penal
Raúl Rubén Soto Aranda	Abogado	Especialista en materia penal- delitos	Abogado Penal

Muestra

10 operadores de justicia, autoridades que ven casos de prisión preventiva en casos de robo agravado del Distrito Judicial de Lima Norte, que serán entrevistados.

Muestra documental: 03 Casaciones que tratan sobre la prisión preventiva que serán analizadas según la ficha de análisis.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

1. Respecto a la guía de preguntas de entrevista, realizadas a los operadores de justicia, se ha analizado la información recogida de cada pregunta elaborada, y se ha verificado en contraste con los objetivos y supuestos jurídicos.
2. Se ha analizado 03 casaciones que tratan sobre la prisión preventiva, utilizando la ficha de análisis de fuente documental
3. Respecto a la ficha de análisis de las normas nacionales, se ha analizado los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, los cuales deben ser analizados para la adecuada aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, además de analizar la Ley de tratamiento procesal de la prisión preventiva y presunción de inocencia, Ley N° 3857.

2.5. Procedimiento

El procedimiento utilizado para analizar cada uno de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas e información recopilada en el desarrollo de la investigación, se ha hecho a través de categorías e información recopilada en el desarrollo de la investigación, así mismo de categorías y subcategorías de la variable materia de estudio.

2.6 Métodos de análisis de información

En el análisis de la información se ha utilizado métodos tales como, el método inductivo, puesto que se partió de los datos proporcionados por los entrevistados (particular) para generar subcategorías y categorías que aporten una comprensión del tema en estudio (general). Así mismo, el método analítico, método descriptivo y método comparativo.

2.7 Aspectos éticos

Fue necesario incorporar a la investigación un conjunto de estrategias y forma de metodología, además para la obtención de la información fue importante conocer el campo para investigar la realidad problemática. El análisis e interpretación es mediante una ficha de observación de las denuncias recibidas en el Ministerio Publico Fiscalía de la Nación, para lo cual incorporé la Ley N° 3857, Ley que precisa los presupuestos mínimos que deben existir para ordenar una prisión preventiva, por ser una medida de carácter personal y de última ratio.

Así mismo lo que establece el artículo N° 268 del Código procesal penal, en relación a los presupuestos procesales que se exige para la adecuada aplicación de la medida coercitiva de prisión preventiva del Distrito de Lima Norte, en las respectivas Fiscalías Penales, como en los Juzgados Penales. Se reunió las denuncias necesarias para realizar el análisis e interpretación correspondiente, por consiguiente, realizar las entrevistas a operadores de justicia, protegiendo sus derechos e identidad personal. Finalmente, la obtención de información para el marco teórico y trabajo en general, fue necesario realizar un análisis de diversos libros, jurisprudencias y tesis anteriores.

III. Resultados

3.1 Descripción de resultados.

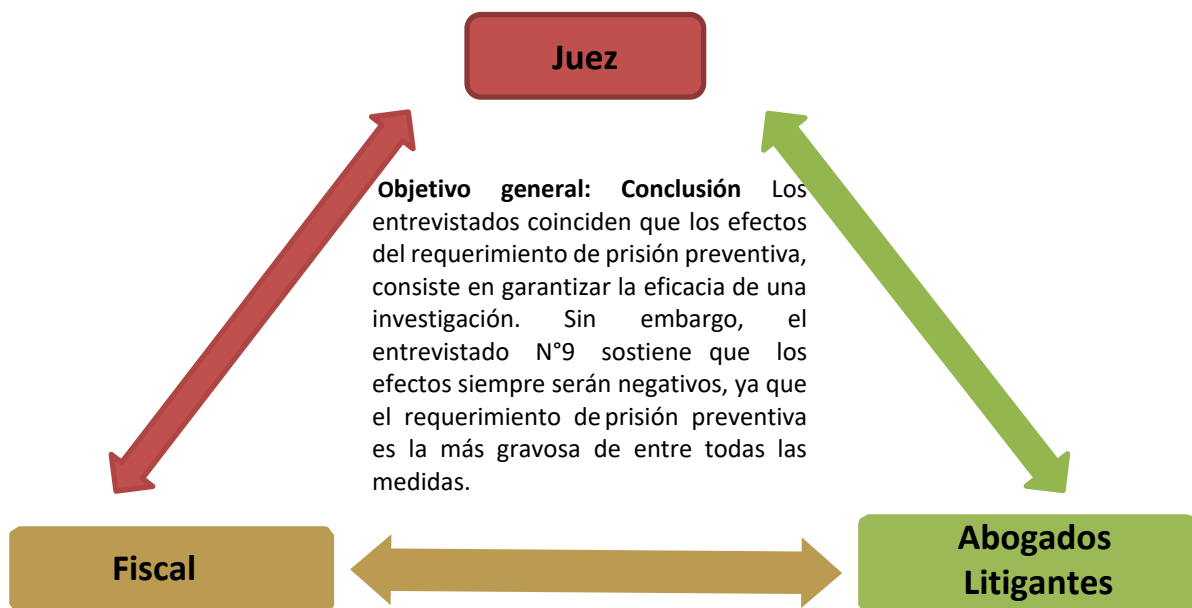
Esta investigación ha efectuado como técnica de recolección de datos la entrevista, análisis documental, y análisis de las normas nacionales, con la finalidad de lograr los objetivos planteados en la investigación, también para poder estructurar las respuestas dadas por los operadores jurídicos, que a continuación se muestran ordenados por objetivos, y mediante la triangulación de datos se logra llegar a la conclusión final de cada objetivo.

Este estudio se realizó con el objetivo de determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte, por ello a continuación detallaremos los objetivos específicos que se ha planteado, con la finalidad de determinar si se logran cumplir después de corroborar con la aplicación de la entrevista, las respuestas dadas por los sujetos de estudio.

Objetivo General:

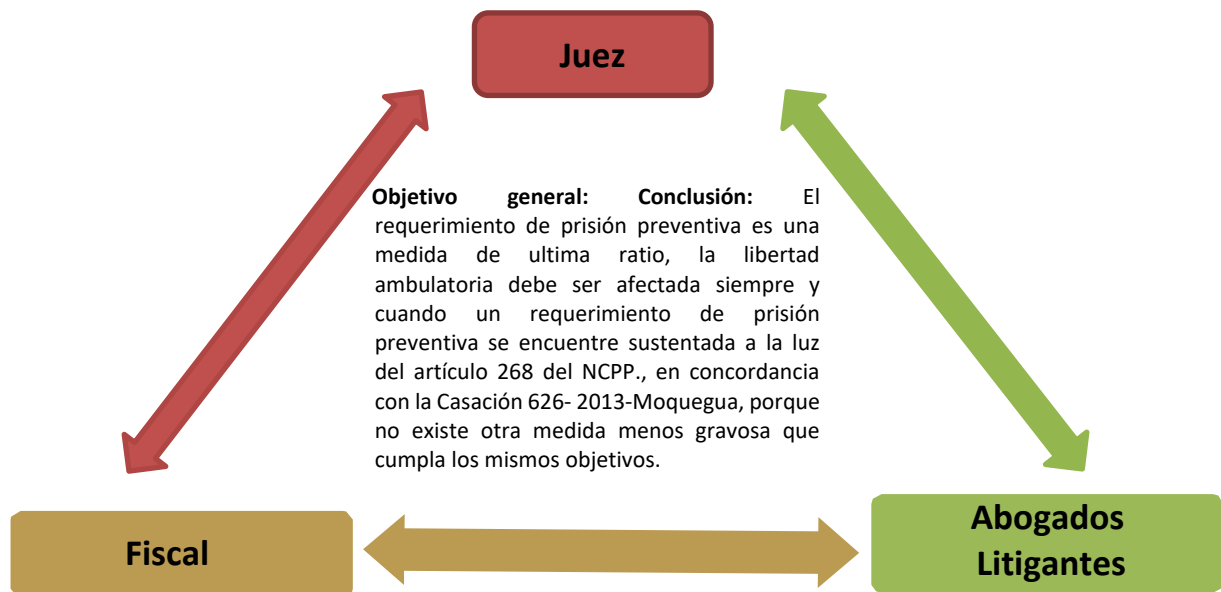
Determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

Pregunta N.º 1: En su condición de especialista. ¿Cuáles serían los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva en el investigado en el delito de robo agravado en Distrito el Judicial de Lima Norte?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que los efectos del requerimiento de prisión preventiva, consiste en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia. Al respecto todos los entrevistados consideran que, si se cumplen los presupuestos de la prisión preventiva, establecida en el Código Penal, no habría efectos negativos. Sin embargo, el entrevistado N° 9, manifestó, una opinión distinta, donde señaló que los efectos siempre serán negativos, ya que el requerimiento de prisión preventiva es la más gravosa de entre todas las medidas de coerción personal.

Pregunta N° 2: ¿Cuál es su postura ante el criterio de requerir la prisión preventiva como ultima ratio en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

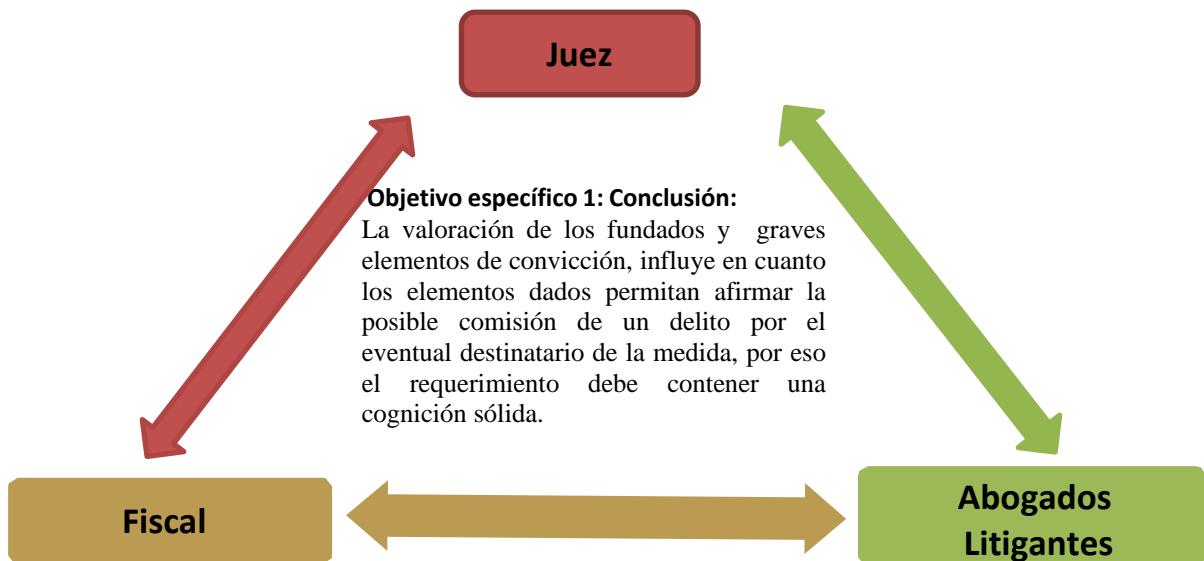


Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que el requerimiento de prisión preventiva, es una medida de ultima ratio, por lo tanto, la libertad ambulatoria, debe ser afectada, siempre y cuando un requerimiento de prisión preventiva se encuentre sustentada a la luz del artículo 268 del NCPP, en concordancia con la Casación 626-2013-Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales. También se ha previsto que la prisión preventiva es una medida utilizada constantemente, porque se considera que no existe otra medida menos gravosa que cumpla los mismos objetivos de la prisión preventiva, siendo necesario siempre analizar la proporcionalidad.

Objetivo específico 1:

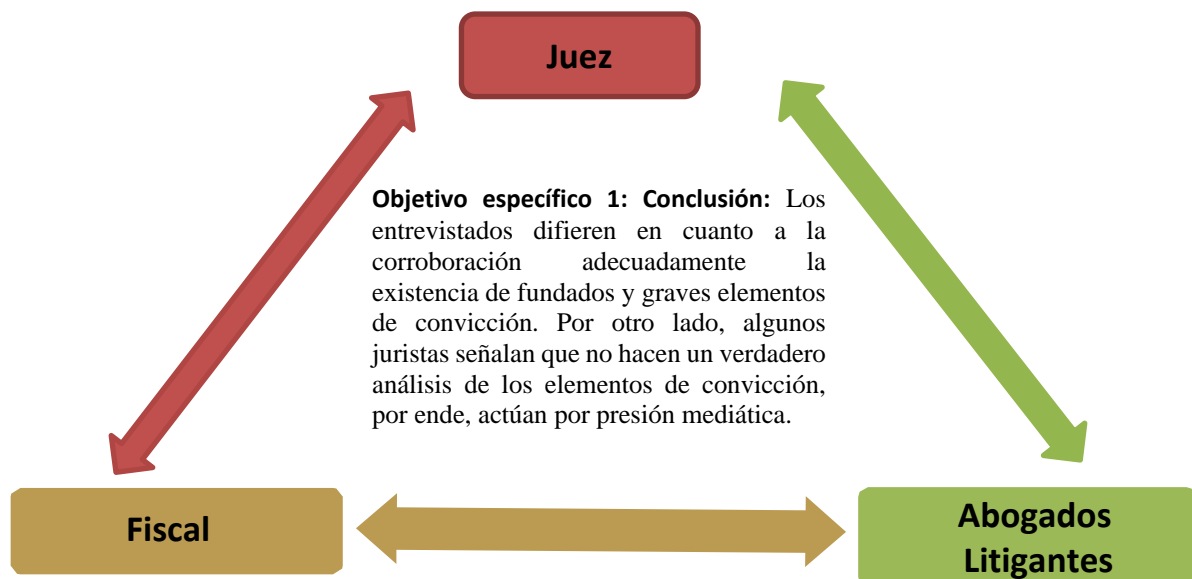
Determinar en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

Pregunta N° 3: ¿Según su criterio, en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influiría en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influyen en cuanto los elementos dados, permitan afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida, por eso el requerimiento debe contener una cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis inculpativa. También se señaló que es importante construir una base de cognición sólida, para el requerimiento de la prisión preventiva, así mismo, que es esencial vincular la violencia o amenaza al agraviado con el autor del delito, como uno de los presupuestos para declarar fundada la prisión preventiva.

Pregunta N° 4: ¿Cree usted que el fiscal de la investigación preparatoria, al momento de requerir la prisión preventiva, corrobora adecuadamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción como son los indicios personales, indicios temporales e indicios concomitantes en el delito de robo agravado? ¿Por qué?

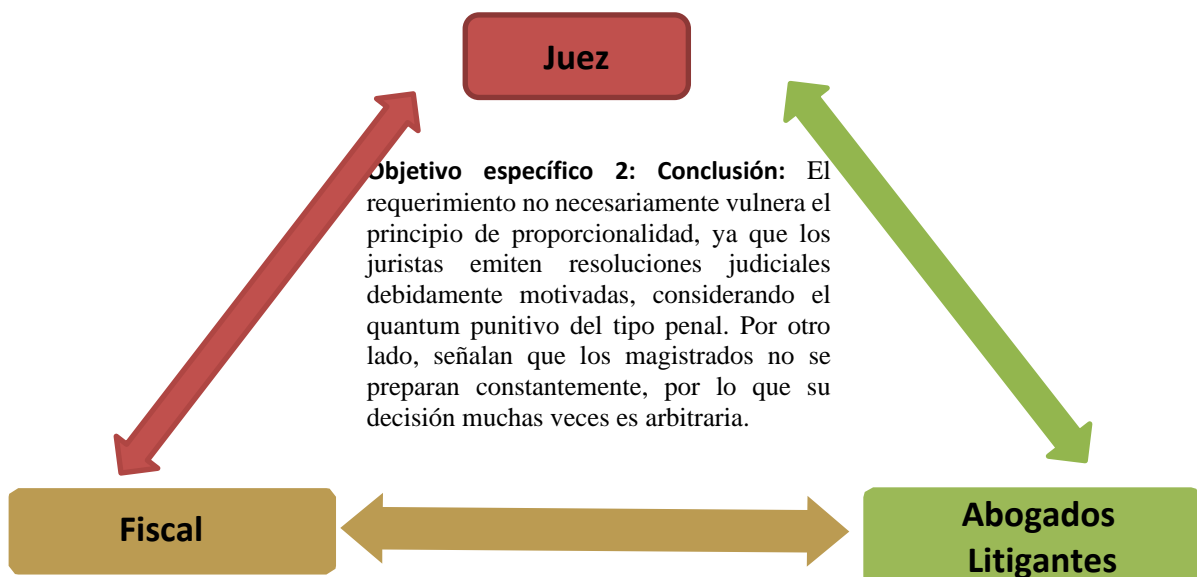


Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que el fiscal de la investigación preparatoria, al momento de requerir la prisión preventiva, debe corroborar cada presupuesto estipulado en el artículo 268 del NCPP, además de tomarse en consideración los fundamentos de la casación de Moquegua (Exp. N°626-2013); todo ello con el propósito de no expedirse una resolución judicial arbitraria o carente de motivación. Así mismo, establecen que el marco de imputación que formule el Ministerio Público tiene que ser congruente y evidente con los elementos de convicción, además que estos sean graves y fundados, además indican que la investigación preparatoria es recabar las pruebas de cargo y descargo. Si son de cargo, verifican si estos tienen la intensidad de graves y fundados. Por otro lado, algunos entrevistados señalan que los fiscales, no corroboran adecuadamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción como son los indicios personales, indicios temporales e indicios concomitantes, porque actúan por presión mediática o simplemente porque no han hecho un verdadero análisis de los elementos de convicción.

Objetivo específico 2:

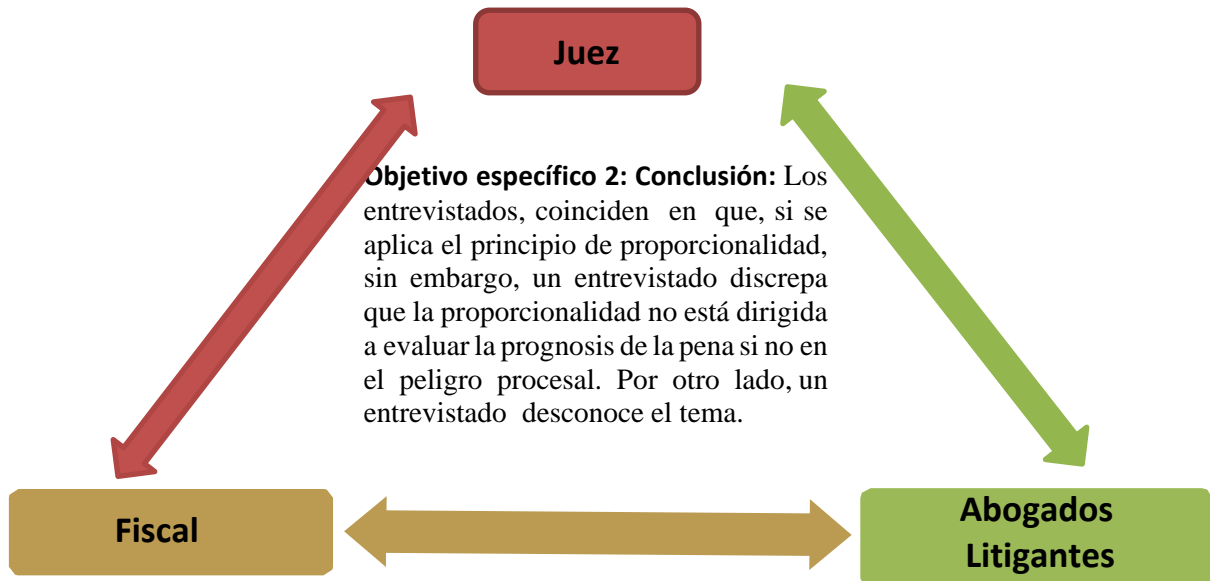
Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

Pregunta N° 5: ¿Según su criterio, los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulneran el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden, en que el Fiscal, debe evaluar la proporcionalidad de la medida coercitiva, la misma que a su vez se desarrolla a través de sus tres sub- principios: Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello el requerimiento no necesariamente vulnera el principio de proporcionalidad, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva, considerando que el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, por lo tanto, es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar judicialmente la pena, realizando un procedimiento valorativo y llegar a una posible pena concreta, debiéndose aplicar los principios de proporcionalidad, principio de legalidad y humanidad de las penas.

Pregunta N° 6: ¿Considera usted que el juez tiene en cuenta el Principio de Proporcionalidad al momento de calificar la pena probable, para la prisión preventiva en el delito de robo agravado al emitir su resolución? ¿Por qué?

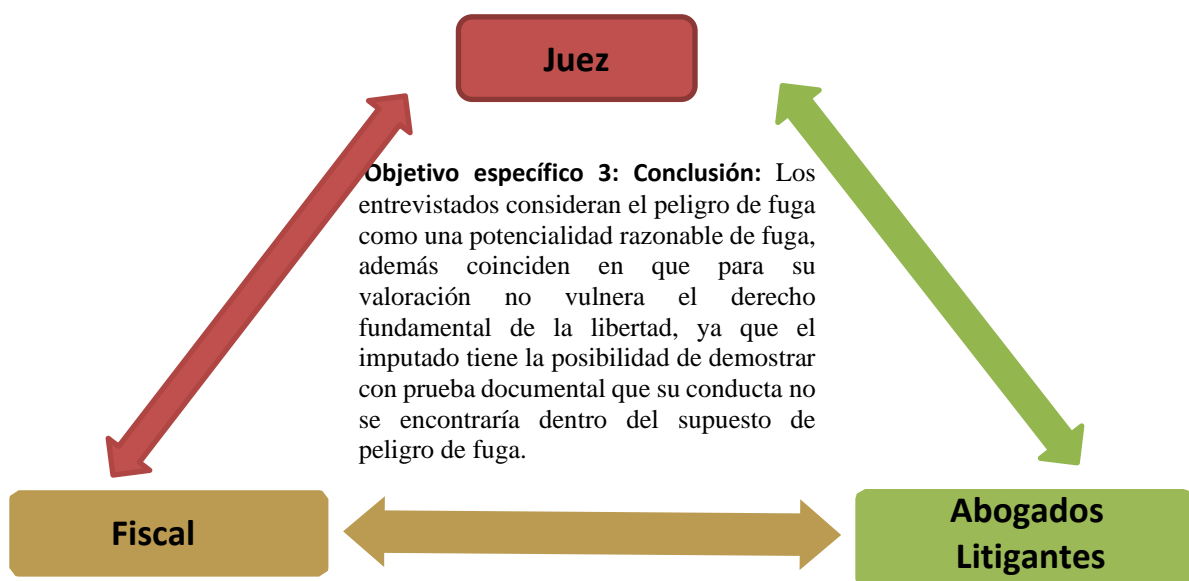


Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que el juez tiene en cuenta el Principio de Proporcionalidad al momento de calificar la pena probable, por lo tanto, si se aplica el principio de proporcionalidad, caso contrario se estaría inobservando la normativa procesal penal vigente, por otro lado, un entrevistado discrepa, fundamentando que, si bien es cierto, el delito de robo agravado supera los 4 años de pena, al analizar la prognosis de la pena, sin embargo, la proporcionalidad no está dirigida a evaluar la prognosis de la pena si no en el peligro procesal. Por otro lado, un entrevistado desconoce el tema.

Objetivo específico 3:

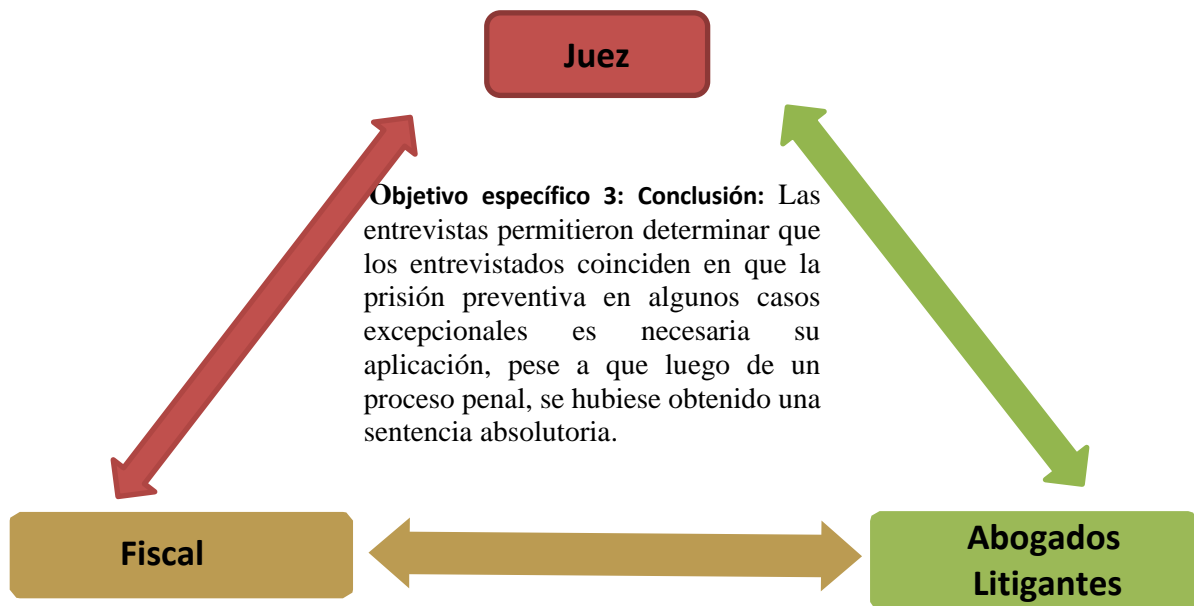
Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

Pregunta N° 7: ¿Según su criterio como especialista, en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?



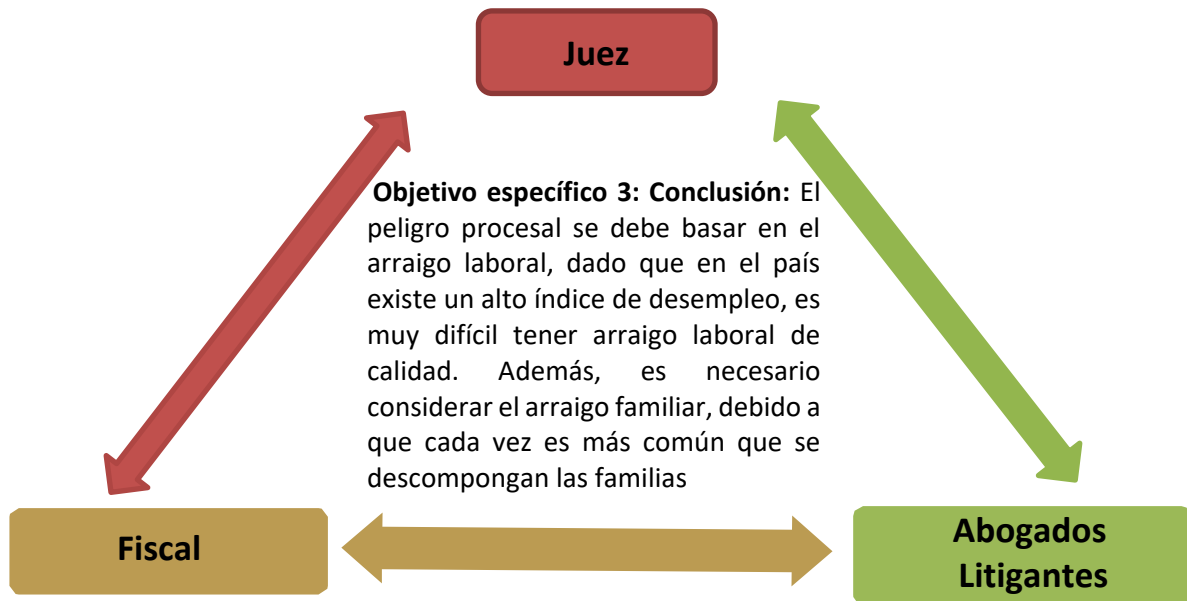
Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados consideran el peligro de fuga es una potencialidad razonable de fuga, además coinciden en que, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Además, no se vulnera, siempre y cuando el análisis del peligro de fuga se realice con datos objetivos y según el caso en concreto, así mismo señalan que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos.

Pregunta N° 8: ¿Considera usted que la prisión preventiva vulnera el derecho fundamental de la libertad, al no ser declarado judicialmente culpable mediante una sentencia firme?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden en que la prisión preventiva en algunos casos excepcionales es necesaria su aplicación, pese a que luego de un proceso penal, se hubiese obtenido una sentencia absolutoria. Así mismo, señalan que es una medida preventiva, excepcional, variable e instrumental, además la constitucionalidad de la prisión preventiva el deber estatal eficazmente los delitos. Por consiguiente, determinan que la prisión preventiva no vulnera el derecho fundamental de la libertad, pero si lo limita, si una prisión preventiva se encuentra debidamente fundamentada no vulnera ningún derecho.

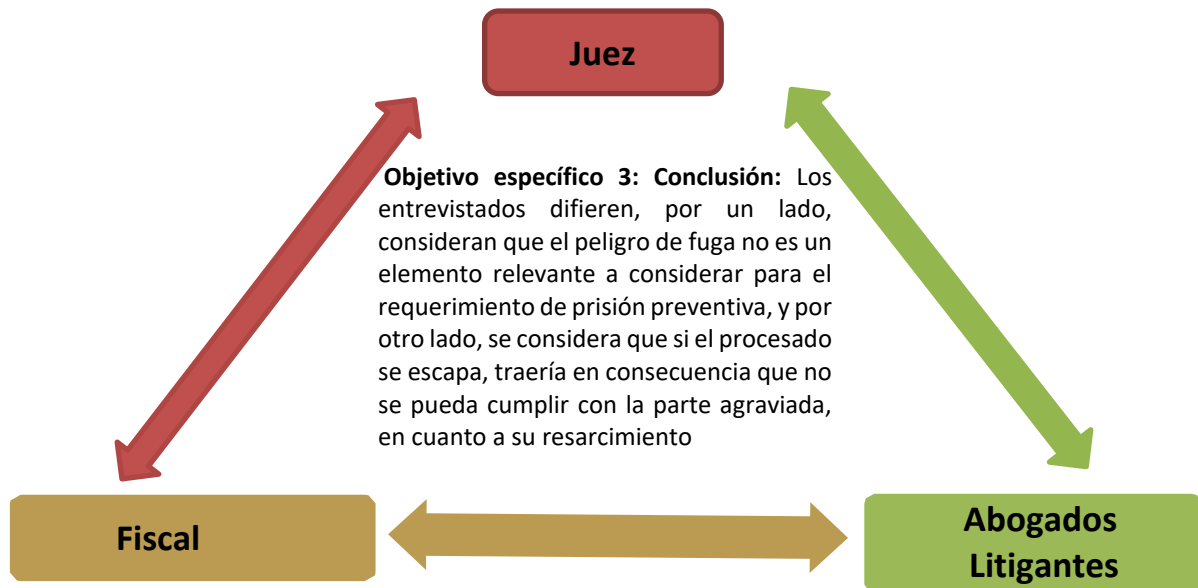
Pregunta N° 9: ¿Cree usted que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo, garantiza la efectividad de la justicia penal en el delito de robo agravado? ¿Por qué?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo debe estar sustentado en el arraigo laboral, es decir debiendo este elemento ser corroborado con los otros presupuestos que exige esta medida coercitiva, a efecto de garantizar la efectividad de la justicia penal. Así mismo, el arraigo laboral generalmente refleja si un investigado se dedica o realiza actividades lícitas; sin embargo, muchas veces la defensa de un investigado, no realiza una sustentación adecuada; circunstancias que lleva al operador de justicia a dictar una medida de coerción.

También es importante considerar el arraigo familiar como aspecto valorado dentro del peligro procesal, a fin de determinar o descartar la posibilidad de que el imputado se encuentre en una situación que pudiera devenir en la sustracción de la justicia. El peligro procesal se debe basar en el arraigo laboral, dado que en el país existe un alto índice de desempleo, es muy difícil tener arraigo laboral de calidad. Además, es necesario considerar el arraigo familiar, debido a que cada vez es más común que se descompongan las familias, y moral debiendo ser sólidos para enervar la presunción de fuga.

Pregunta N° 10: ¿Considera usted, que el daño causado que podría producirse por el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado?

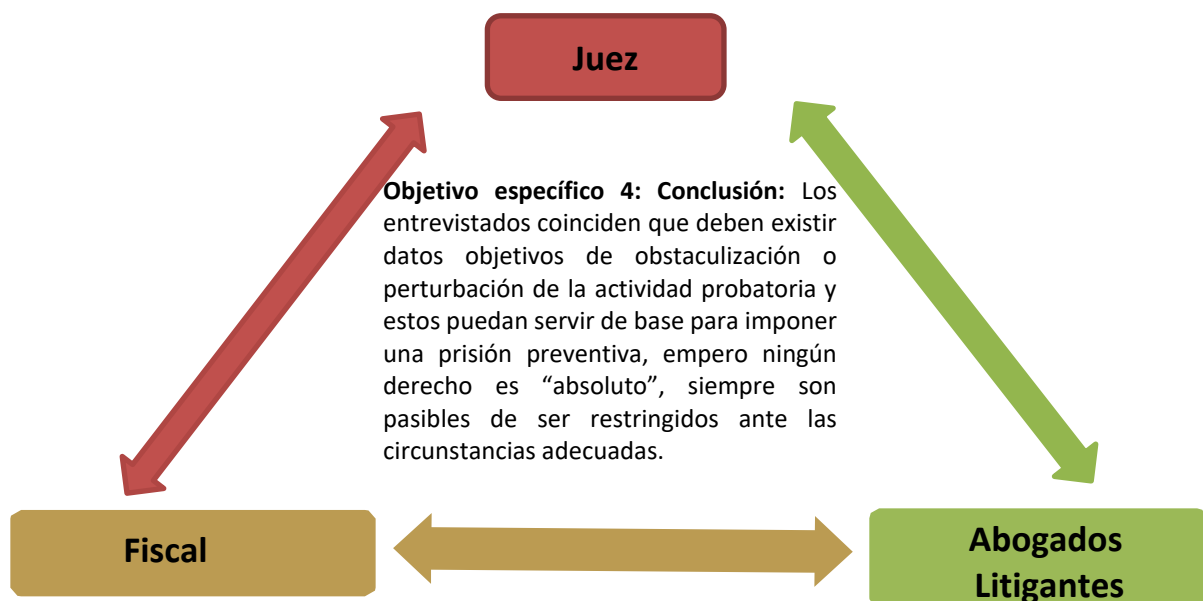


Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados difieren, acerca si el daño causado que podría producirse por el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva, por un lado, consideran que no, ya que la casación 631-2015-Arequipa establece que la gravedad de la pena y antigüedad del daño causa no puede ser argumentado para mejorar en forma automática la prisión. Por otro lado, se considera que el peligro de fuga, si es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva, porque si el procesado se escapa, traería en consecuencia que no se pueda cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento, por el daño ocasionado. Además, en el caso de estar frente a un verdadero delincuente, su fuga implicaría mayor índice de robo e inseguridad ciudadana.

Objetivo específico 4:

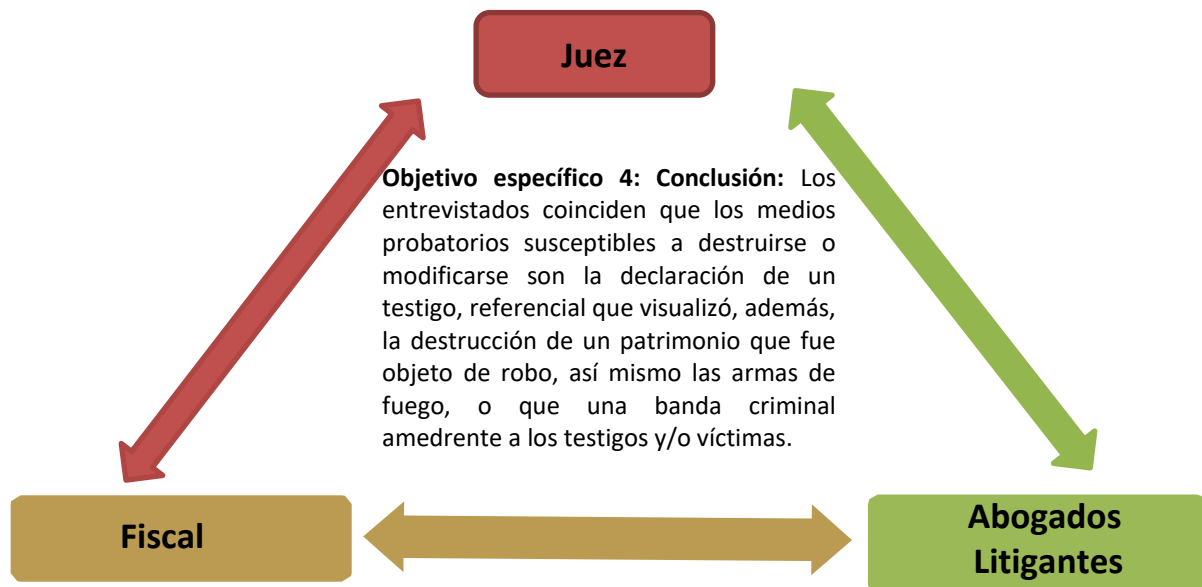
Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Pregunta N° 11: ¿Según su criterio, en qué medida la valoración del peligro de obstaculización, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?



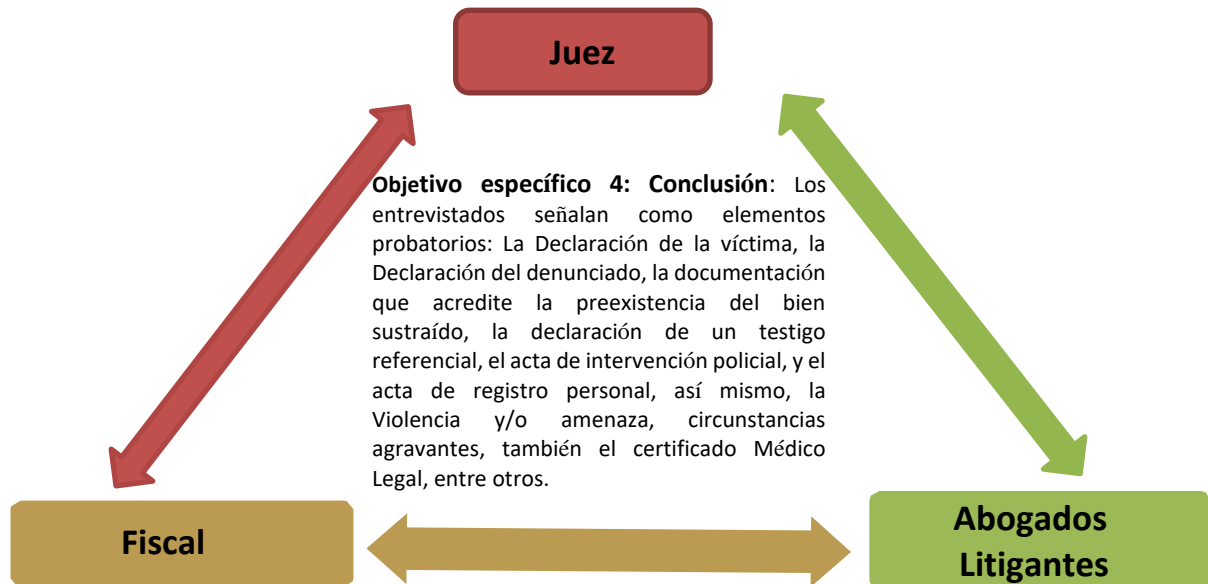
Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados, coinciden en que deben existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva, además de considerar que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho se “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas. Por lo tanto, consideran que la prisión preventiva no transgrede el derecho fundamental de la libertad, si no por el contrario previene que el imputado(s) adopte una conducta de entorpecimiento de la actividad probatoria correspondiente al Ministerio Público, en ese sentido, se considera esta medida, para que no se obstaculicen ciertos elementos de prueba que debe tener en conocimiento obstaculicen el fiscal para el sustento de su incriminación.

Pregunta N° 12: ¿Qué medios probatorios son susceptibles a destruirse o modificarse durante la investigación preparatoria en el delito de robo agravado?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados coinciden que los medios probatorios susceptibles a destruirse o modificarse son la declaración de un testigo, referencial que visualizó el preciso instante o momento en que una persona fue víctima de un asalto a mano armada. También se presentaría cuando una motocicleta que fue objeto de robo durante la noche por parte de varios sujetos descarriados, es destruida con el propósito en desaparecer todo indicio de la comisión de un hecho delictivo. Así mismo, algunos entrevistados sostuvieron que, en este ilícito los delincuentes actúan con gran crueldad, por ello, un medio de prueba susceptible a que se modifique, serían las armas de fuego, o que una banda criminal amedrente a los testigos y/o víctimas.

Pregunta N° 13: ¿Qué elementos probatorios son relevantes en la prisión preventiva en el delito de robo agravado?



Los resultados de la entrevista permitieron determinar que los entrevistados señalan distintas respuestas acerca de los elementos probatorios, que son relevantes para la prisión preventiva en el delito de robo agravado, siendo los siguientes: La Declaración de la víctima, la Declaración del denunciado, la documentación que acredite la preexistencia del bien sustraído, la declaración de un testigo referencial, el acta de intervención policial, y el acta de registro personal. Otro entrevistado sostuvo que son la Violencia y/o amenaza, circunstancias agravantes (pluralidad de agentes, armas de fuego, violencia, etc.). Así mismo, otro entrevistado, consideró como elementos probatorios relevantes en la prisión preventiva, el certificado Médico Legal, el conocimiento de la víctima para su autor, la declaración de la víctima.

Como resultados de la técnica de observación, se realizó concurriendo a audiencias donde se apreció la conducta que tenía el Juez de la investigación preparatoria, Fiscal y Abogado Defensor, dónde se pudo observar en una audiencia de Prisión Preventiva, que estaba a cargo de la Jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria, Dra. Verónica Torres Cuadros, que claramente ella le pedía al Fiscal que en ese acto señale los elementos facticos de su

requerimiento de prisión preventiva, además donde sucedieron los hechos, indicar si se cumplen los presupuestos establecidos en el Artículo N° 268 del Código Procesal Penal, así devolver en ese acto la carpeta fiscal e inmediatamente se daba traslado a la parte de la defensa técnica, que comienza a cuestionar punto por punto los presupuestos materiales del artículo 268 del NCPP, siendo que los medios probatorios ofrecidos por el fiscal entran en debate, siendo que el juez de investigación preparatoria realizó las preguntas para el esclareciendo del tema en debate, visto todo ello, el juez fundará la prisión preventiva si se cumplen los elementos materiales para dictarla, siendo que si no llega cumplir cualquier extremo, no habrá modo de fundar la medida coercitivo, siendo la persona que llevara su proceso en total libertad hasta la emisión del fallo judicial.

3.2. Codificación abierta

Se realizó la codificación abierta seleccionando segmentos o unidades de análisis relevantes, mediante la comparación constante que nos ayude a encontrar dimensiones y relaciones que nos permita dar con las categorías iniciales, que serán codificadas.

3.2.1 Los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva

Los entrevistados consideraron que los efectos producidos a partir de un requerimiento de prisión preventiva consisten en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurado en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia.

Así mismo, los efectos que se producen es que cumpla con las garantías de Ley del procesado o imputado a fin de que verifique que se cumplan con todos los presupuestos establecidos en el artículo 268 del NCPP, y en relación al daño causado por la comisión del Robo Agravado.(F2) Además los efectos serían que muchas de las personas terminen reclusas en un centro penitenciario, toda vez que no esté llevando con legalidad la verificación de cada uno de los presupuestos (A1). También, entre los efectos, se da la privación de la Libertad temporal, que busca el Titular de la Acción Penal, para el aseguramiento de su concurrencia a Juicio. (A4). Por otro lado, si el juez de garantía da la razón al Titular de la acción Penal, siendo el delito de Robo Agravado será no menor de 9 meses, prolongables a 18 meses de Prisión preventiva.(A4).

3.2.2 Se producen efectos negativos en la prisión preventiva

Muchas veces los efectos terminan siendo negativos para los imputados, toda vez que su defensa técnica no acredita con presentar los medios probatorios o arraigos que evite que el imputado lleve su proceso en total libertad con las garantías mínimas que establece la ley (F1). Además, los entrevistados A1 – A4, sostienen que los efectos para el imputado, serían negativos, ya que tendría que afrontar el proceso en prisión. Por otro lado, los efectos siempre serán negativos, ya que el requerimiento de prisión preventiva es la más gravosa de entre todas las medidas de coerción personal y es indispensable contratar un buen abogado que denomine los alcances de la prisión preventiva. (A3).

También, se ven afectados los familiares, en razón que tendrán que realizar visitas al Penal, frente a ello lo que se llama el drama familiar, por el requerimiento de Prisión preventiva. (A4).

3.2.3 Se producen efectos positivos en la prisión preventiva

La prisión preventiva coadyuva para que llegar al esclarecimiento de la verdad, evitando muchos obstáculos en el proceso se realiza en el delito de robo agravado toda vez que este delito es bien frecuente (J2). Si el requerimiento de la prisión preventiva se encuentra bien sustentado y ésta en audiencia es resuelta por el juez dictando la prisión preventiva, por lo que esta decisión si se encuentra bien fundamentada, entonces no tendría ningún efecto negativo para el derecho (A1). Además, no existe un efecto negativo, porque en el requerimiento de Prisión preventiva es facultad del Juez efectuar un control de legalidad sobre el mismo, amparando o desistimiento la pretensión del Ministerio Público (J3).

3.2.4 Efectos nocivos para el Estado

Cuando la administración de justicia al hacer uso discriminado de la prisión preventiva acoge este pedido, sin mayor sustento y valoración, hace que se incremente la población penitenciaria, lo que genera diversos problemas social y económico para el Estado (A1).

3.2.5 *La prisión preventiva como ultima ratio*

La postura está orientada a que la restricción de la libertad ambulatoria, debe ser afectada, siempre y cuando, un requerimiento de prisión preventiva se encuentre sustentada a la luz del artículo 268 del NCPP., en concordancia con la Casación 626-2013-Moquegua, afecto de que se declare fundada esta medida coercitiva (F1). Así mismo, el entrevistado F2, considera que la prisión preventiva debe ser aplicado como ultima ratio, sin embargo en la actualidad se aplica constantemente, con el objetivo de resguardar o evitar el peligro procesal a fin de que el imputado sea juzgado con elementos de convicción que acrediten la comisión del delito como es el caso del robo agravado.

Es importante considerar, que antes de requerirla aplicación de prisión preventiva es primero verificar el cumplimiento de los presupuestos materiales tipificado en el artículo 268 del NCPP, y los precedentes vinculantes respecto de otros temas similares (A1). Además, la entrevistada J1, sostiene que, en su experiencia como Jueza, ha podido evaluar o calificar el requerimiento de prisión efectiva requerido por el Fiscal, observando en reiterados procesos que los fiscales que requieren prisión preventiva notienen suficientes elementos probatorios que ampare su pretensión, siendo que muchos de ellos terminan siendo desestimado en su pedido. También, los procesos de prisión preventiva requeridos por el Fiscal, deben estar debidamente motivados y se debe solicitar su aplicación como ultima ratio, buscando así otras medidas menos gravosas, que eviten la restricción de su libertad (J2).

La solicitud de Prisión preventiva como última ratio, se da cuando existe un eminente peligro de fuga u obstaculización a la actividad probatoria, por parte del Imputado o pueda interceder en la víctima, testigos o peritos (A4).

3.2.6 *La prisión preventiva es excepcional.*

Todos los entrevistados coinciden que la prisión preventiva es de naturaleza excepcional. Así mismo la prisión preventiva es excepcional, si no la regla general la comparecencia (J3). Así mismo, según la doctrina y la jurisprudencia, señala que la prisión preventiva es una medida coercición excepcional y extrema, y tal como lo dijera el profesor San

Martin “nunca la sola gravedad del hecho justifica la prisión preventiva (A1). En concordancia a lo anterior, el entrevistado A3, sostiene que evidentemente es necesario que estudiemos que no existe otra medida menos gravosa que cumpla los mismos objetivos de la prisión preventiva, siendo necesario siempre analizar la proporcionalidad.

3.2.7 Valoración de los fundados y graves elementos de convicción, en el requerimiento de prisión preventiva

Todos los entrevistados coinciden en que la existencia y fundados elementos de convicción, establecen la realidad de un hecho de relevancia penal y que el sujeto esté vinculado. Así mismo, permiten afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida. Por tanto, el requerimiento debe contener una cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis inculpativa (F1). Además, si existen elementos graves y fundados que acreditan la comisión de un hecho delictivo, los efectos recaerían que el imputado lleve su proceso recluido en un centro penitenciario, hasta el esclarecimiento del caso respecto del delito de robo agravado (F2).

En ese contexto, el entrevistado F3, sostiene que en su experiencia como Fiscal provincial titular, al momento de requerir la prisión preventiva brinda elementos de convicción suficientes y fundados, pero la defensa técnica de la imputada trata de desvirtuar los fundamentos del fiscal, acreditando los arraigos. También, la entrevistada J2, en su experiencia como Jueza, sostiene que es importante que los elementos de convicción deban ser valorados con cautela y pasar por un filtro riguroso que sea difícil cuestionar su validez u obtención, a fin de evitar que la teoría del caso del fiscal sea desvirtuada. Por otro lado, influye mucho, porque el marco de imputación que formule el Ministerio Público tiene que ser congruente y evidente con los elementos de convicción, así mismo, estos sean graves y fundados, si no hay imputación concreta no puede declararse fundada la prisión preventiva. (J3).

Deben existir mayores elementos de convicción que vinculen al imputado como autor, definitivamente va ser este elemento el que va a inclinar la decisión que deba adoptar el Juez, pero esta decisión según la Doctrina y la Jurisprudencia debe estar a la par con los otros presupuestos, no solo para dictar prisión preventiva, sino quizás otra medida menos gravosa

como el uso del grillete electrónico (A1). Además, es esencial vincular la violencia o amenaza al agraviado con el autor del delito, influye en el requerimiento (A3).

En concordancia con lo anterior, la valoración de los fundados y graves elementos de convicción tiene impacto directo en la debilidad e inconsistencia de los fundamentos de la decisión judicial; característica inherente al autoritarismo inquisitivo (A4).

3.2.8 Corroboración adecuada de los Indicios personales, Indicios temporales e Indicios concomitantes al requerir la prisión preventiva

El fiscal verifica que se haya cumplido con los presupuestos, asimismo que dichos elementos crearan convicción al juez antes de emitir su fallo ajustado a la legalidad (F2). Así mismo, un punto débil es que muchas veces el requerimiento del fiscal carece de motivación, siendo que no cuentan con indicios fehacientes que prueben el delito de robo agravado en contra del imputado (A1). También, durante del desarrollo de la audiencia de prisión preventiva los fiscales requieren dicha medida sustentando sus fundamentos en indicios personales, temporales, concomitantes pero que no logran crear convicción ante el juez o jueces (J1). Además, los fiscales sustentan su requerimiento solo en indicios, mas no en un elemento de convicción consistente que acredita la perpetración de un hecho delictivo, la prisión preventiva se ve desnaturaliza toda qué vez que su aplicación se realiza de manera constante (J2).

Por otro lado, el entrevistado A1, sostiene que muchas veces le da más importancia al segundo presupuesto de la sanción que le corresponde por el tipo penal, por tanto, en la etapa preliminar tanto el Ministerio Público y el policía solo se dedican a acopiar pruebas e indicios de cargo, de esta forma reforzar su pretensión de requerimiento de prisión preventiva. En ese contexto, el entrevistado A3 y A4, sostiene que muchas los fiscales, actúan por presión mediática o simplemente porque no han hecho un verdadero análisis de los elementos de convicción.

3.2.9 Vulneración del principio de proporcionalidad

Todos los entrevistados consideran que no necesariamente se va a vulnerar el principio de proporcionalidad, al momento de requerir la prisión preventiva. Así mismo, el entrevistado

A1, sostiene que el principio de proporcionalidad es una garantía constitucional que rige todo el proceso de prisión preventiva, valorándose adecuadamente en qué medida será efectiva la prisión preventiva en el delito de robo agravado. Los efectos del requerimiento no necesariamente vulneran el principio de proporcionalidad, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva para que sea otorgada (F1).

También, se ha visto desnaturalizado siendo que su aplicación se da manera continua siendo que este se aplica de manera excepcional siendo que su aplicación debe estar sujeto al principio de proporcionalidad y demás principios protegidos por la constitución (F2). En ese contexto los entrevistados J3 y A4, sostienen que el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar judicialmente la pena, realizando un procedimiento valorativo y llegar a una posible pena concreta.

Además, cuando el requerimiento de prisión preventiva se encuentra bien sustentado, con sólidos argumentos, de pruebas de cargo y/o indicios antecedentes, concomitantes y posteriores que realmente vinculen al procesado como autor del ilícito, entonces no habría vulneración al principio de la proporcionalidad de la pena (A2). Así mismo, el entrevistado A3, alega que la prisión preventiva parece una pena anticipada pero no lo es, solo es una medida para asegurar los fines del proceso, y la proporcionalidad de la pena se debe estudiar al momento de condenar al imputado

3.2.10 El peligro de fuga en relación a la prisión preventiva

Todos los entrevistados coinciden, que el peligro de fuga es un presupuesto importante a considerar y valorar para que el Fiscal pueda solicitar la prisión preventiva, debiendo ser corroborado de manera adecuada, tomando en cuenta el arraigo correspondiente: Arraigo laboral, domiciliario o familiar. Así mismo, el entrevistado F1, sostiene que el peligro de fuga, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Además, el peligro de fuga es indispensable para requerir su

aplicación, es por ello que si existe dicho peligro se le privaría de la libertad al imputado (F3). También, el peligro de fuga es un tema crucial que está relacionado con la restricción de la libertad siendo que con la acreditación de esta configuraría dicha medida (A2).

Por otro lado, el entrevistado J3, considera que no se vulnera el derecho a la libertad, siempre y cuando el análisis del peligro de fuga se haga en datos objetivos y según el caso en concreto. Así mismo, el entrevistado A1, sostiene que la práctica procesal, nos revela que en la mayoría de decisiones judiciales solo se tiene en cuenta el primer y segundo presupuesto, dejando de lado el último presupuesto, como si este fue de menor jerarquía o de menor importancia, es ahí cuando se vulnera el derecho a la libertad personal.

3.2.11 El peligro de obstaculización en relación a la prisión preventiva

El peligro de obstaculización es un peligro procesal bastante discutido e influye bastante en la restricción de la libertad del imputado (F2). Así mismo, el entrevistado A1, sostiene que el entorpecimiento de la actividad probatoria es bastante importante todo ello, toda vez que depende de los medios probatorios se estaría en juego la libertad del imputado (F3). Además, el entrevistado J3 considera que no intuye, ya que deben existir datos objetivos de obstaculizar o perturbar la actividad probatoria. Por otro lado, el juez debe valorar todo el proceso, y verificar si realmente existe riesgo o peligro de fuga que permita evidenciar que el imputado quiera eludir a la justicia (J2).

Por otra parte, se considera que el juez no lo toma en cuenta para negar el requerimiento de prisión, se argumenta de que el procesado podría afectar los elementos de prueba e influenciar a los componentes del proceso, llámese co-imputado, testigos y otros. También, se considera que considerar el peligro de obstaculización, busca prevenir que el imputado(s) adopte una conducta de entorpecimiento de la actividad probatoria con la finalidad de que el requerimiento del Ministerio Público no tome conocimiento de elementos de prueba que sustenten una incriminación, ya que muchas veces el imputado podría influenciar en la víctima, testigos y peritos, con la cual estaría en la posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria en la investigación (A4).

3.2.12 Medios probatorios son susceptibles a destruirse o modificarse durante la investigación

Por la gravedad y gran connotación del delito, los delincuentes actúan con gran crueldad, armas de fuego o una banda criminal, y es evidente que pueda amedrentar a testigos y/o víctimas. (J3). Por consiguiente, un medio de prueba susceptible a que se modifique, es la declaración de un testigo, referencial que visualizó el preciso instante o momento en que una persona fue víctima de un asalto a mano armada (F1y A2). Así mismo el imputado buscar destruir o eliminar pruebas contundentes que lo involucren en un hecho delictivo en la cual se está vertiendo su libertad (J2).

En ese contexto, el entrevistado A1, sostiene que la concurrencia de este presupuesto, es que el procesado gozando de comparecencia simple o restringida, puede poner en riesgo los elementos de prueba o influir en los actores del proceso, de esta forma distorsionar la postura o versión de los co – imputados, agraviado o testigos. En consecuencia, mayormente tiende a desacreditarse la vinculación de los hechos con el autor del delito, o la violencia ejercida en la víctima, desacreditando el certificado médico legal (A3). Además, también se ha considerado, como medios probatorios a destruirse, los documentales, así como la desaparición de los testigos o agraviados, como la modificatoria de las pericias, es decir todo son vulnerables (A4).

3.3.Codificación axial

Las categorías iniciales nos servirán para encontrar las categorías más generales denominados temas generales, que resultan de la integración de las categorías en patrones que aparecerán de manera repetida entre las categorías iniciales (Hernández y Mendoza, 2018).

Tabla 3. *Temas generales y categorías iniciales*

Temas generales	Categorías iniciales
Requerimiento de la prisión preventiva	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos de convicción graves y fundados • Prognosis de la pena • Peligro procesal • Proporcionalidad de la medida • Duración de la medida
Peligro procesal (Peligro de fuga)	<ul style="list-style-type: none"> • Arraigo • Gravedad de la pena que se espera • Magnitud del daño y la ausencia de una actitud voluntaria • Comportamiento del imputado en el procedimiento u otro anterior • Pertinencia a una organización delictiva o su reintegración a la misma
Peligro procesal (Peligro de obstaculización)	<ul style="list-style-type: none"> • Destrucción, modificación, sustracción o falsificación de elementos de prueba • Influir en coimputados, testigos o peritos, para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente • Inducir a otras personas a informar falsamente o a que se comporten deslealmente.
Plazo de la prisión preventiva	<p>Existen 3 tipos de procesos, y cada uno conlleva a un plazo distinto para su cumplimiento, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos comunes: 9 meses, prorrogable por igual plazo. • Procesos complejos: 18 meses, prorrogables por igual plazo • Crimen organizado: 36 meses, prorrogable por 12 meses
Reacción del Estado frente a la conducta infractora	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas criminales destinadas a regular el uso de las medidas de coerción de prisión preventiva • Medidas menos gravosas o salidas menos fuertes, que sean alternativas, ante de aplicarse la medida de la prisión preventiva • Análisis adecuado en concordancia del artículo 268 del nuevo Código Procesal penal en concordancia con la casación 626-2013- Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración

A partir del análisis y comparación constante de las unidades de análisis detectadas en las entrevistas realizadas se detectaron los siguientes temas generales:

Requerimiento de la prisión preventiva

Peligro de fuga

Peligro de obstaculización

Plazo de la prisión preventiva

Reacción del Estado frente a la conducta infractora

3.4. Codificación selectiva

En este estudio, la categoría central establece que el requerimiento de la prisión preventiva, busca garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia, debiendo existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva. Entre los efectos, surge la privación de la Libertad temporal. Así mismo, entre efectos nocivos, tenemos que se generan diversos problemas sociales y económicos para el Estado, cuando la administración de justicia al hacer uso discriminado de la prisión preventiva acoge este pedido, sin mayor sustento y valoración, en consecuencia, hace que se incremente la población penitenciaria. Por ello debería, a partir del requerimiento de la medida cautelar, la prisión preventiva, debe analizarse con exactitud, en concordancia del artículo 268 del nuevo Código Procesal penal en concordancia con la casación 626-2013- Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración.

Discusión

La investigación ha permitido analizar los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva en los procesados, y en base a las conclusiones dadas en el estudio, se puede afirmar que los antecedentes citados tienen similitud con los resultados de la investigación. Tal es el caso, en el contexto Nacional, se tiene la tesis de Delgado (2017), quién señalo que la medida de la detención preventiva, se caracteriza por ser preventivo, donde se busca prevenir que el investigado huya de la investigación del proceso en la etapa de la investigación preparatoria, además tiene un carácter excepcional, es decir para determinados casos donde se verifique que los requisitos establecidos en el código penal si cumplen debidamente. Esta investigación se asemeja, ya que establece que la medida de prisión preventiva se aplica de ultima ratio, es importante señalar que ante cualquier otro interés que se tenga durante el proceso, deberá prevalecer el derecho a la libertad que tiene el investigado, sin embargo se exceptúa esta regla, cuando se debe analizar si debe aplicarse o no los principios de proporcionalidad y razonabilidad, porque en consecuencia podría haber excesivas personas encarceladas injustamente creando sobrepoblación carcelaria

Con respecto a la tesis de Montero (2018), establece que a pesar de los diversos cambios en la legislación penal, e incluso el cambio en el código procesal penal, los juristas no lograron investigar de manera adecuada a las personas en libertad, por ello muchas veces se ve como han sido encarceladas muchas personas, sin que hubiera un análisis adecuado de los presupuestos para la aplicación de dicha media, en consecuencia creando altos estándares de prisioneros en las diversas cárceles asignadas para recibir a los presos. Así mismo, la tesis de Serrano (2015) coincide, quien refiere que los Magistrados, y abogados juristas indican que no es algo constitucional, la acción de privar el derecho de la libertad a los investigados mediante el requerimiento de prisión preventiva, porque se restringe la libertad del investigado, antes de que exista una sentencia firme.

Las investigaciones realizadas a nivel nacional tomadas como referencia, citando a Ríos (2017), que señala que refiere que a lo largo del tiempo se han desarrollado diversas medidas personales para el investigado, sin embargo, cuando nos referimos a la prisión preventiva se genera un mayor debate en la legislación penal nacional e internacional, debido

a que es una medida que se aplica dentro del proceso penal, sin haberse dictado una sentencia, donde supuestamente el procesado se encuentra protegido por su presunción de inocencia.

En la tesis de Lorenzo, Diego, y Duce (2011) se concluye que la prisión preventiva, es una medida judicial que permite dar encarcelamiento a las personas que son sospechosas de haber cometido un supuesto delito, por ello, las personas investigadas, serán inmersas en un proceso penal de investigación, mediante el cual se podrá averiguar la verdad, analizando el grado de participación, dolo o culpa que le corresponda.

Con respecto a las entrevistas realizadas y el marco teórico consultado se puede apreciar que los operadores jurídicos coinciden en que la prisión preventiva tiene como efecto principal garantizar que exista la eficacia en un proceso penal, que se dará en contra del imputado, quien será sospechoso de sustraerse del sistema de justicia, sin embargo para la imposición de la prisión preventiva deben existir elementos objetivos de obstaculización o perturbación en la investigación, que podrían servir para esclarecer los elementos necesarios para poder imponer la medida de prisión preventiva. Además, señalan que es una medida de ultima ratio, por lo tanto, la libertad ambulatoria, se verá afectada toda vez que un requerimiento de prisión preventiva se encuentre debidamente sustentado a la luz del artículo 268 del NCPP., en concordancia de los 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración, los cuales se encuentran señalados en la Casación 626-2013-Moquegua.

Por otro lado Sánchez (2011), fundamenta que el juez de la investigación preparatoria se verá en la necesidad de evaluar y analizar los elementos probatorios o de convicción, los cuales serán pruebas que acompañarán lo solicitado por el fiscal, ya que son de gran relevancia para el proceso al momento de imponer la medida de prisión preventiva, por otro lado, no habrá posibilidad de aplicar la prisión preventiva, en el caso que existan demasiados elementos probatorios que sirvan para acreditar el supuesto delito, pero que no se relacione con el investigado, toda vez que para su determinación se requiere el cumplimiento de todos los presupuestos a cabalidad de la prisión preventiva, que respalden dicha medida provisional.

Respecto del objetivo 1, que responde a: “Determinar en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.”, se puede

aseverar que es preciso aplicar la normatividad vigente, de la manera adecuada de investigación, que permita analizar de manera idónea los presupuestos de la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que no es adecuado solicitar dicha medida sin la fundamentación acerca de su decisión, dictada por el Juez. Considerando los resultados obtenidos de los instrumentos se podrá determinar que existe una discrepancia en cuanto a los efectos producidos por la prisión preventiva, por parte de los operadores de justicia, ya que, para empezar, por un lado, manifiestan que la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, deben ser elementos que nos permita afirmar la posible comisión o perpetración de un delito por el eventual destinatario de la medida, por eso el requerimiento debe contener una cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis inculpativa, de esta manera se puede corroborar lo mencionado por las autoridades entrevistadas.

Nos detalla a continuación: Chávez (2013), en referencia al inciso 1 del artículo 268 del NCPP, que menciona los elementos o presupuestos debe considerar el Magistrado y/o Juez para determinar si merece la aplicación de la prisión preventiva, siendo que lo que debe evaluar o considerar es: La sustentación o acreditación de que existan graves elementos probatorios de convicción y la relación del delito con el inculcado o imputado que se identifique como autor o participe del hecho delictivo.

Así mismo, Zevallos, Onofre, Conopuma, Romero, Valencia y Torres (2017), quienes sostienen que los efectos del requerimiento de prisión preventiva, consiste en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia, argumentando que no existe un efecto negativo, porque en el requerimiento de Prisión preventiva es facultad del Juez efectuar un control de legalidad sobre el mismo, amparando o desistimiento la pretensión del Ministerio Público

Por otro parte, Soto (2019) sostiene que el titular de la acción penal, busca el aseguramiento de la privación de la libertad del investigado, para el aseguramiento de su concurrencia a Juicio, siendo los primeros efectos en un requerimiento de prisión preventiva. Además, que sólo procederá la aplicación de la prisión preventiva, cuando las demás medidas cautelares no fueran suficientes para asegurar los propósitos del proceso penal.

En, pero, Tapia, Valverde, Santa Cruz y Villa (2019), sostiene que cuando el fiscal requiera la medida de prisión preventiva al Juez de la investigación preparatoria, será poderosamente probable que el Juez admita dicha medida. los efectos para el imputado serían negativos, ya que tendría que afrontar el proceso en prisión. Además, si la decisión del Juez, si se encuentra bien fundamentada, entonces no tendría ningún efecto negativo para el derecho, más aún si esta decisión es confirmada por el superior, en cambio esta decisión siempre va a ser negativo para el procesado, sobre todo cuando alega inocencia. Además, los efectos nocivos para el Estado, es cuando la administración de justicia al aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva acoge este pedido, sin mayor sustento y valoración, hace que se incremente la población penitenciaria, lo que genera diversos problemas social y económico para el Estado.

Por consiguiente, lo dicho por los entrevistados, Zevallos, Onofre, Conopuma, Romero, Valencia y Torres no toman en cuenta lo mencionado por Tapia, Valverde, Santa Cruz y Villa, quienes sostienen que cuando se acoja el requerimiento de prisión preventiva, los efectos serían negativos para el imputado, ya que afrontaría la investigación del supuesto delito en prisión.

Respecto del objetivo 2, que responde a: “Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.”, donde de esta manera se puede corroborar lo mencionado por las autoridades entrevistadas.

En cuanto al principio proporcionalidad , se establece que la prohibición o limitación de un derecho fundamental entiende una aprobación legal, siendo que se da respecto al principio deproporcionalidad, siendo que esta medida requiere obligatoriamente elementos de convicción necesarios para el proceso penal (artículo 253 inciso 2 del NCPP), es por ello que el operador de justicia está en la obligación de establecer un juicio de proporcionalidad cuando se aplica una medida cautelar o coercitiva, entendiéndose que se deberá valorar correctamente si es necesario o indispensable limitar un derecho fundamental con el objetivo de buscar los fines públicos en el desarrollo del proceso penal.

Así mismo, Onofre, Conopuma y Torres (2019), refieren que el principio de proporcionalidad no necesariamente se ve vulnerado ante el requerimiento de la prisión

preventiva, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva.

En, pero, Romero (2019), sostiene que el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, además es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar concretamente la pena, y a través de determinados lineamientos de valoración, establecer una posible pena.

Por otro lado, Tapia (2019), sostiene que el requerimiento de la prisión que va de la mano con la formalización de la investigación preparatoria, no vulneraría el principio de la proporcionalidad de la pena, puesto que, en la investigación penal, se espera una posible condena, que finalmente en el juzgamiento se determinará el quantum de la pena.

En concordancia a lo anterior, Valencia (2019) sostiene que el representante del Ministerio Público previamente evalúa la proporcionalidad de la medida coercitiva, la misma que a su vez se desarrolla a través de sus tres sub- principios: Idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Así mismo, Soto (2019), sostiene que el requerimiento de la medida prisión preventiva no vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el supuesto delito cometido, por lo que sus efectos no causan un perjuicio a la proporcionalidad de la pena, ya que la pena establecida en el Código Penal por el delito de robo agravado, es no menor de 12 ni mayor de 25 años de pena privativa de la libertad, además en la gran mayoría de casos, el Fiscal solicita para asegurar el proceso, de 9 a 18 meses de prisión preventiva para el investigado, la misma que es temporal y no permanente.

Por otro lado, Villa (2019), sostiene que la medida coercitiva de la prisión preventiva solo es una medida para asegurar los fines del proceso, y aunque se declarase fundada la proporcionalidad de la pena, no es una pena anticipada, sólo busca que el investigado no trate de obstaculizar la investigación. Además, se debería tener en cuenta el principio de proporcionalidad sin embargo existen los magistrados que no se preparan constantemente, por lo que su decisión muchas veces es arbitraria.

Respecto del objetivo 3, que responde a: “Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte”, podemos ver que el peligro de fuga, es una potencialidad razonable de fuga, en ese caso, no se vulnera el derecho fundamental a la libertad, ya que el procesado tiene la posibilidad demostrar con prueba documental de que no se encuentra con las intenciones de fugarse. La casación 631-2015-Arequipa establece que la gravedad de la pena y antigüedad del daño causa no puede ser argumentado para mejorar en forma automática la prisión. Por otro lado, se considera al peligro de fuga como elemento, ya que, si el procesado se escapa, en consecuencia no se podría cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento. Todos los entrevistados, coinciden que en cuanto la valoración del peligro de fuga, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, por lo que el imputado, puede demostrar con prueba documental que su conducta no coincide dentro del supuesto de peligro de fuga.

Además, la Casación N° 626-2013, identificó ciertos argumentos amparados en el derecho respecto de los arraigos como criterios relevantes para determinar si existe peligro de fuga, estos son: para acreditar el peligro de fuga del imputado No puede tomarse como un elemento relevante el hecho que realice muchos o pocos viajes, siendo que los criterios relevantes para evidenciar dicho peligro procesal, sería que el investigado no cumpla con los arraigos establecidos en la ley siendo el familiar, laboral, asimismo tenga conexiones o contactos con las personas del extranjero que puedan ayudar a fugarse del país, que se haga una verificación de los elementos investigados con los elementos provenientes de la esencia del hecho y gravedad de la pena, así mismo el importe económico a pagar de la pena, siendo que no deberían ser analizadas de manera independiente ninguna de ellas.

Por otro lado, Onofre, Conopuma, y Torres (2019), sostiene que, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Además, sostienen que el requerimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva, debe estar sustentado en base al arraigo, principalmente en base al arraigo laboral, también es importante considerar el arraigo familiar como aspecto valorado dentro del peligro procesal, a fin de determinar o descartar la posibilidad de que el imputado se encuentre en una situación que pudiera devenir en la sustracción de la justicia.

En concordancia a lo anterior, Romero (2019) sostiene que el tercer presupuesto material que consta del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; si bien la doctrina y la jurisprudencia obliga a que los tres presupuestos deben ser tomados en cuenta, por tanto, estas deben ser concurrentes (tal como señala la propia norma, Art. 268 del CCP), en la práctica procesal que se ve a diario, revela que en la mayoría de decisiones judiciales solo se tiene en cuenta el primer y segundo presupuesto, dejando de lado el último presupuesto, como si este fuese de menor jerarquía o de menor importancia, es ahí cuando se vulnera el derecho a la libertad personal, que implica el deber del juez de motivar adecuadamente sus resoluciones debiendo tener una decisión proporcionada.

Así mismo, Tapia (2019), en referencia lo anterior sostiene que la mayoría de los que incurrir en el delito de robo agravado son reincidentes o habituales, en ese extremo si estaríamos frente a la concurrencia del peligro de fuga, dejando de lado el arraigo sea familiar o laboral, pero cuando nos encontramos frente a una persona que es primario y las circunstancias denotan una grave necesidad y el medio en que se encuentra.

Por consiguiente, Valencia, y Soto (2019), sostiene que el peligro de fuga, es una potencialidad razonable de fuga, en ese caso, no se vulnera el derecho fundamental a la libertad, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos, ya que el procesado tiene la posibilidad demostrar con prueba documental de que no se encuentra con las intenciones de fugarse.

Respecto del objetivo 4, que responde a: “Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte “, de esta manera se puede corroborar lo mencionado por los las autoridades entrevistadas.

Así mismo, Onofre y Villa (2019), sustentan que el peligro de obstaculización, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga., sostiene que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.

Por otro lado Tapia (2019), sostiene que se da una grave afectación al derecho a la libertad, toda vez que no es tomado en cuenta por el Juez el peligro de obstaculización, lo que hasta la fecha desde la puesta en práctica de esta figura jurídica de la prisión preventiva, este presupuesto es la que quizás menos amparo tuvo, vale decir que el juez no lo toma en cuenta en la mayoría de casos para negar el requerimiento de prisión, más bien en este extremo siempre se argumenta de que el procesado podría afectar los elementos de prueba e influenciar a los componentes del proceso.

En relación a lo anterior Romero (2019), sostiene que deben existir datos objetivos que permitan obstaculizar o perturbar la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva. Sin embargo, Romero no tomó en cuenta lo descrito por Tapia, donde sostiene que el peligro de obstaculización muchas veces no es tomado en cuenta por el Juez, entonces surge una grave afectación al derecho a la libertad.

Por otra parte, Soto y Valencia (2019), sostiene que la aplicación de la medida coercitiva de la Prisión preventiva es de última ratio, pero que se debe tener en cuenta que el imputado podría influenciar en la víctima, testigos y peritos, con la cual estaría en la posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria en la investigación., pues no se viola el derecho fundamental de la libertad, puesto que se trata del delito de Robo Agravado.

Además, la valoración del peligro de obstaculización busca prevenir que el imputado(s) adopte una conducta de entorpecimiento de la actividad probatoria correspondiente al Ministerio Público, por lo tanto, no transgrede el derecho fundamental de la libertad, también para que no se tome en conocimiento, ciertos elementos de prueba que sustenten una incriminación en el supuesto delito cometido.

Conclusiones

Respecto al primer objetivo general, se puede apreciar que los operadores jurídicos coinciden en que los efectos del requerimiento de prisión preventiva, consiste en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia, además, que para su imposición deben existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva, además de considerar que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”.

Por consiguiente, si el requerimiento de la prisión preventiva se encuentra bien sustentada y ésta en audiencia es resuelta por el juez dictando la prisión preventiva, encontrándose bien fundamentada, entonces no tendría ningún efecto negativo para el derecho, más aún si esta decisión es confirmada por el Superior, en cambio esta decisión siempre va a ser negativo para el procesado, sobre todo cuando alega inocencia, ya que el requerimiento de prisión preventiva es la más gravosa de entre todas las medidas de coerción personal y es indispensable contratar un buen abogado que denomine los alcances de la prisión preventiva.

Los primeros efectos en un requerimiento de Prisión Preventiva, es la privación de la Libertad temporal, que busca el Titular de la Acción Penal, para el aseguramiento de su concurrencia a Juicio. Además, entre los efectos nocivos, tenemos que se generan diversos problemas sociales y económicos para el Estado, cuando la administración de justicia al hacer uso discriminado de la prisión preventiva acoge este pedido, sin mayor sustento y valoración, en consecuencia, hace que se incremente la población penitenciaria.

El segundo efecto es que también se ven afectados los familiares, en razón que tendrán que realizar visitas al Penal, frente a ello lo que se llama el drama familiar, por el requerimiento de Prisión preventiva.

El tercer efecto es que, el juez de garantía que otorga la razón al abogado defensor del imputado, debe tener criterio para determinar la aplicación de la prisión preventiva, siendo esta una medida de carácter personal, que tiene una duración no menor de 9 meses, siendo prolongables hasta 18 meses de ser un caso complejo, y por ser de última ratio, la prisión

preventiva sólo procederá después de haber determinado que las demás medidas cautelares resultaron insuficientes para asegurar los objetivos de un proceso penal.

Respecto al primer objetivo específico, se pudo verificar que los operadores jurídicos, coinciden en que la prisión preventiva debe ser aplicada como medida de última ratio, por ello se deben analizar los presupuestos estipulados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, en concordancia con la Casación 626-2013-Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración, por lo tanto, debe haber una adecuada valoración de los fundados y graves elementos de convicción, de lo contrario no habrá una influencia positiva en el requerimiento de prisión preventiva.

La valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en cuanto los elementos dados permitan afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida, por eso el requerimiento debe contener una base de cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis inculpatoria para el requerimiento de la prisión preventiva. Así mismo, señalan que es esencial vincular la violencia o amenaza al agraviado con el autor del delito, como uno de los presupuestos para declarar fundado la prisión preventiva.

Así mismo, la debida corroboración de cada presupuesto estipulado en el artículo 268 del NCPP, el análisis y consideración de los fundamentos de la casación de Moquegua (Exp. N° 626-2013); será con el propósito de no expedirse una resolución judicial arbitraria o carente de motivación. Sin embargo, muchas veces, los operadores de justicia, no hacen un verdadero análisis de los elementos de convicción, por ende actúan por presión mediática, realizando su requerimiento bajo presión de la prensa, es por ello que en muchos casos corroboran inadecuadamente la existencia de los fundados y graves elementos de convicción, además muchas veces los fiscales son provisionales sin experiencia y no hacen una verdadera valoración sobre los indicios, así como los concomitantes en el delito de robo agravado, muchas veces solicitan la prisión preventiva con la sola sindicación, sin tener mayores elementos de convicción.

Por consiguiente, según las respuestas obtenidas por los operadores jurídicos respecto objetivo específico 2, que menciona de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad, se concluye, en cuanto a la prognosis de

la pena, el delito de robo agravado supera los 4 años de pena, además que la proporcionalidad no está dirigida a evaluar la prognosis de la pena si no en el peligro procesal.

Se concluye que el requerimiento no necesariamente vulnera el principio de proporcionalidad, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva, considerando que el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, por lo tanto, es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar judicialmente la pena. Sin existen algunos magistrados que no se preparan constantemente, por lo que su decisión muchas veces es arbitraria. Por lo tanto, si se aplica el principio de proporcionalidad, caso contrario se estaría inobservando la normativa procesal penal vigente, por otro lado, sostienen que el delito de robo agravado supera los 4 años de pena al analizar la prognosis de la pena, sin embargo, la proporcionalidad no está dirigida a evaluar la prognosis de la pena si no en el peligro procesal. Por otro lado, un entrevistado desconoce el tema.

Según las respuestas obtenidas por los operadores jurídicos respecto al objetivo específico 3, los entrevistados concluyen en cuanto a la valoración del peligro de fuga, que este elemento es una potencialidad razonable de fuga, además consideran que, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Además, incluyen la valoración del arraigo, como presupuesto para el requerimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, refiriéndose al arraigo laboral, familiar, domiciliario, e incluso moral, esta medida de coerción personal, no necesariamente es para catalogarlo como ya responsable del ilícito, sostiene que no garantiza absolutamente nada porque los arraigos analizados, únicamente dan cuenta de que el investigado cumple con los requisitos formales de los arraigos, pero que eso no garantiza la efectividad de la justicia.

Por otro lado, se considera al peligro de fuga como elemento, ya que, si el procesado se escapa, en consecuencia, no se podría cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento. Los entrevistados difieren si el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva, por un lado, consideran que no, ya

que la casación 631-2015-Arequipa establece que la gravedad de la pena y antigüedad del daño causa no puede ser argumentado para mejorar en forma automática la prisión, por otro lado, se considera al peligro de fuga como elemento, ya que, si el procesado se escapa, en consecuencia, no se podría cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento.

Según las respuestas obtenidas por los operadores jurídicos respecto al objetivo específico 4, los entrevistados concluyen que el peligro de obstaculización, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Por otro lado, los entrevistados coinciden que deben existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva, además de considerar que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.

Los entrevistados, refieren en cuanto la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad que el peligro de obstaculización, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga. Así mismo, coinciden que deben existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva, además de considerar que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.

Además, señalan distintas respuestas acerca de los elementos probatorios, para la prisión preventiva, siendo los siguientes: La Declaración de la víctima, la Declaración del denunciado, la documentación que acredite la preexistencia del bien sustraído, la declaración de un testigo referencial, el acta de intervención policial, y el acta de registro personal. Otro entrevistado sostuvo que son la Violencia y/o amenaza, circunstancias agravantes (pluralidad de agentes, armas de fuego, violencia, etc.). Así mismo, otro entrevistado, consideró el certificado Médico Legal, el conocimiento de la víctima para su autor, la declaración de la víctima.

Recomendaciones

La recomendación principal de esta investigación es establecer políticas criminales que están destinados a regular el uso de las medidas de coerción de prisión preventiva, en contra del imputado, optando por aplicar una medida menos gravosa, siendo que dicha aplicación se dé como ultima ratio, con la finalidad de reducir la sobrepoblación de presos que se encuentren en calidad de investigados o imputados por un presunto delito cometido, evaluando cada uno de los presupuestos materiales y verificando la legalidad en todo el procedimiento respecto del delito de Robo Agravado.

La recomendación respecto al objetivo específico uno, sería que antes de requerir el mandato de prisión preventiva, se evalúen los presupuestos materiales regulados en el artículo N° 268 del NCPP advirtiéndole que existen elementos de convicción relevantes que sustenten la imposición de la medida, tomando en cuenta el principio de legalidad, razonabilidad y excepcional, analizando si es necesario aplicar prisión preventiva u otra medida cautelar de naturaleza personal, sin que sea restringida la libertad del procesado frente a un interés colectivo de la justicia penal, a fin de que lleve su proceso con las garantías constitucionales y enfrente a la justicia en libertad en amparo del principio de presunción de inocencia, asimismo podemos tomar en cuenta jurisprudencias vinculantes para un mejor desarrollo de un caso vertiente con similar al planteado en esta investigación.

La recomendación respecto al segundo objetivo específico, será que en un delito de robo agravado se analice a cabalidad las circunstancias y los hechos agravantes antes la imposición de la prisión preventiva, para que no se vea injusto, la aplicación de tal medida, tomándose en cuenta los plazos de ley, siendo que este se interpone sin tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, imponiendo una medida de coerción no acorde con el daño causado u ocasionado, además el juez debe verificar el fiel cumplimiento de todos los principios y garantías que rigen este proceso, emitiendo un fallo debidamente motivado punto por punto, respetando los plazos razonables sin vulnerar ningún derecho fundamental del imputado.

La recomendación respecto al tercer objetivo específico sería que se implementen otros mecanismos más fuertes o rigurosos que protejan el normal desarrollo del proceso ante un posible riesgo de fuga por parte del imputado, Así mismo, debe examinarse si la medida de

prisión preventiva persigue un fin constitucionalmente legítimo, además se debe analizar si la medida es adecuada en cada caso, donde existe un presunto autor del delito, ya que puede dañar el derecho fundamental de libertad de la persona que está siendo sometida a un proceso

Que se implementen otras medidas menos gravosas o salidas menos fuertes, que sean alternativas, ante de aplicarse la medida más gravosa, que es la prisión preventiva, además que, se genere una efectiva política de resocialización de la persona que esta indebidamente sometida en una prisión preventiva, sin libertad y en un penal, asimismo cuando se haya de declarado fundada la prisión preventiva, sin embargo el procesado consiguieprobar que no tiene responsabilidad alguna en relación al delito penal, se le debe indemnizarde oficio, ello significaría resarcir el daño moral, personal, económico , psicológico.

Finalmente se deben hacer evaluaciones análisis exhaustos de los presupuestos del artículo N° 268 del código procesal penal, con la finalidad de analizar adecuadamente todos los presupuestos, así mismo debe considerar en concordancia con la casación 626-2013-Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración, lo cual deberá ser observado por los operadores de justicia, a efecto de que se declare fundada esta medida coercitiva.

Referencias Bibliográficas:

- Aquize, R. (2018). Influencia de las prevenciones general y especial en la infracción penal cometida por adolescentes, en la competencia territorial de los juzgados de familia del cercado de Arequipa, de setiembre del 2014 a setiembre del 2016. Arequipa - Perú: Universidad Católica de Santa María.
- Aranzamendi, N.(2010). La Investigación Jurídica. Lima: Grijley.
- Araujo, S. (2017). El proceso especial de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado. Lima, Perú: UCV.
- Arce, M. (2009). El poder coercitivo del Juez De acuerdo al nuevo Modelo Procesal Penal (1ra. Edición). Arequipa: Editorial Adrus.
- Arce, R. (2017). La prisión preventiva y su relación con los derechos humanos en el nuevo sistema penal acusatorio. La Paz, B.C.S: Universidad Autónoma de baja California Sur.
- Asencio, J. (2012). Derecho Procesal Penal (6ta Edición). Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
- Arción, C. (2013). Robo a transeúntes en vía pública. Visión criminológica
- Cabana, R. (2015). Abuso del mandato de prisión preventivo y su incidencia en el crecimiento de la población penal en el Perú. Juliaca: Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez.
- Cáceres, R. (2009). Las medidas Cautelares en el nuevo Código Procesal Penal. (1ra Edición). Lima: Jurista Editores E.I.R.L.
- Castellano, D. & Castellano, R. (2012). Agresión y violencia en América Latina. Perspectivas para su estudio: Los otros son la amenaza. Espacio Abierto. Lima.
- Cusi, R. (2017). Prisión Preventiva ¿Qué alego en la audiencia? (1ra edición). Lima. Editorial AC Ediciones.

- Cacha, R., & Vereau, J. (2016). El proceso de terminación anticipada y la desnaturalización de la teoría de la prevención especial de la pena. Trujillo, Peru: UNT. Candia, L.
- (2016). Deficiente tratamiento penitenciario en la rehabilitación al interno en el establecimiento penitenciario puno ex penal de yanamayo 2013 - 2014. Puno, Perú: UANCV.
- Chipana, Y. (2016). La uniformidad en la aplicación de la cadena perpetua en los supuestos de terminación anticipada y conclusión anticipada de juicio
- Condori, E. (2016). Necesidad de la aplicación de acuerdos parciales en el proceso especial de terminación anticipada con pluralidad de imputados en relación a las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria de la caja – 2015 y la necesidad de su reto. Arequipa - Perú: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.
- Cuba, E. (2017). Reinserción social de los internos en los centros penitenciarios del estado peruano. Lima, Perú: UCV.
- Delgado, R. (2017). Criterios para fijar el plazo razonable en el mandato de prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lambayeque durante el Periodo 2014-2016 en la Provincia de Chiclayo. Lambayeque: Universidad Pedro Ruiz Gallo.
- Delgado, K., & Arana, W. (2016). La vigencia efectiva del principio de igualdad procesal y los derechos del agraviado. Trujillo, Lima.
- Dudley, S., & Bargent, j. (2017). El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en américa latinoamericana. Insight crime.
- Fernández, C. M. (2017). La prisión preventiva y su vulneración al derecho a la presunción de inocencia de los procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas en el establecimiento penitenciario de Huánuco, 2015. Huánuco, Perú
- Figuerola, I. (2017). La aplicación excesiva de la prisión preventiva y el rol del Juez penal como garante de los derechos constitucionales en el proceso penal. Guayaquil:

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

- Kostenweinn, E. (2015). Prisión preventiva: entre los medios de comunicación y las autoridades políticas. Revista & Praxis. (6ta. Ed.) Rio de Janeiro.
- Llobet, R. J. (2009). La prisión preventiva y la presunción de inocencia según los órganos de protección de los derechos humanos del sistema americano. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C, México,
- Medina, J. (2017). El hacinamiento en el establecimiento penitenciario de Huánuco, 2015. Huánuco, Perú: UDH.
- Morales, M. (2016). La incidencia de la gestión privada de los establecimientos penitenciarios en la resocialización de los sentenciados a pena privativa de libertad efectiva desde una óptica del penal san Joaquín de quillabamba. Cuzco, Peru: UAC.
- Montero. J. (2018). La prisión preventiva y el Derecho a la presunción de inocencia en el delito de extorsión en la Corte superior de Justicia de Lima Norte, 2017. Lima: Universidad Cesar Vallejo de los Olivos.
- Noel, M. (2015). Hacinamiento penitenciario en américa latina: causas y estrategias para su reducción. México: CNDH.
- Nunovero, L. (2017). Factores de Aumento de la Población Penitenciaria en el Perú, Medidas Alternativas y Vigilancia Electrónica. Lima, Perú: Estudios Penales y criminológicos.
- Obando, F. (2018). Las tensiones entre la eficacia procesal y presunción de inocencia. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Oblitas, R. (2017). El hacinamiento en el establecimiento penal de quillabamba y el tratamiento penitenciario intramuros”. Cusco, Perú: UAC.
- Paja, M. (2015). Implicancias de la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva, como presupuesto material en el NCPP, para que el Juez pueda dictar el mandato de prisión preventiva. Juliaca: Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (Tesis Doctoral)

- Palacios, D. (2018). Detención y prisión preventiva En el Código Penal. (1ra edición) Lima. Editorial: Editora Librería Griley E.I.R.L.
- Palomino, O. & Quevedo, A. (2015). La prisión preventiva como instrumento vulnerador del principio constitucional de presunción de inocencia. Cajamarca: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
- Sánchez, M. J. (2016). Análisis de Derecho: La prisión permanente revisable en las legislaciones españolas y alemanas (Tesis doctoral). Universidad de Murcia.
- Serrano, G. (2015). La prisión preventiva Judicial y la vulneración del derecho de inocencia del investigado en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014- 2015. Huánuco: Universidad de Huánuco.
- Talavera, P. (2004). Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.
- Talavera, P. (2017). La prueba penal. (1ra edición). Lima: Editorial: Instituto pacifico.
- Terrones, N. (2017). Sobrepoblación penitenciaria y tratamiento penitenciario de los internos sentenciados del Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo. Huaraz-2016. Huaraz, Perú: UCV.
- Ovejero, M.A. (2017). Protección del Derecho a la Presunción de Inocencia, Universidad Europa de Madrid.
- Valdivia, R. (2017). Factores que contribuyen a la ineficacia del trabajo penitenciario como tratamiento en el establecimiento penal de cambio puente 2013 - 2014. Moquegua, Perú: UJCM.
- Vásquez, F. (2016). Garantía del Estado de inocencia en el derecho penal ecuatoriano. Lima-Perú.
- Adato, G. (2001). Derechos y sujetos a proceso. (2da edición). México: Dirección general de publicación y fomento editorial. Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=hZ1APrud4LgC&pg=PA49&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZtOXJzMPjAhWMslkKHWcZBbM4FBD0AQgyMAM#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false>

Alonso, F. (2019). Tribunal Constitucional y fines de la prisión provisional. Editorial Bosch Editor. España. Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=ZAeXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiw46uczsPjAhXCtlkKHW RqBbo4bhDoAQhbMAk#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false>

Bustamante, A. (2019). Falta de motivación a la prisión preventiva de los artículos 534 y 522 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal afectando el Derecho Constitucional a la libertad con los principios de igualdad y equidad. Recuperado de: Garay, N. (2017). Responsabilidad civil de los jueces de investigación preparatoria por el daño causado al imputado, en el distrito judicial de Huánuco, 2016. Recuperado de:

<http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/3555/PCP%2000135%20G21.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Giorgio A. (2015). Medidas de coerción La Prisión Preventiva. Buenos Aires. Editorial Dunken. Recuperado de:

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=7T_OBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&ots=MLmUOptJK5&sig=NDRzJ46S9Sevjz0UKH8IGIdszTk#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false

López, P. (2017). La Prisión preventiva frente al principio de la presunción de inocencia. Recuperado de:

<http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6572/1/PIUAMCO041-2017.pdf>

Pacheco, G. (2000) Los derechos humanos Documentos básicos Tomo II. (3ra edición). Chile. Editorial Jurídica de Chile. Recuperado de:

https://books.google.com.pe/books?id=WY_zwNQFZkMC&pg=PA729&dq=prisi%

[C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwihzcSizcPjAhUk11kKHc9YD2s4PBDoAQg0MAI#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=DmuVBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwihzcSizcPjAhUk11kKHc9YD2s4PBDoAQg0MAI#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false)

Pacheco, P. (2018). Peligro Procesal sobre imposición de la prisión preventiva en el delito de Robo Agravado en Juzgados Penales Lima 2018. Recuperado de: file:///C:/Users/Angel/Downloads/Pacheco_PJM.pdf

Sandoval. F. (2004). Responsabilidad Penal y Detención Preventiva. Colombia. Editorial Universidad del Norte, 2013. Recuperado de:

https://books.google.com.pe/books?id=DmuVBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwifz5u0zcPjAhXIjVkJHS7LB_Ko4UBDoAQhRMAg#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false

Silva, M. (2017). Tratamiento jurídico Doctrinal e la prisión Preventiva en el Perú. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Recuperado de:

<http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/2790/253T20171171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Vásquez. G. (2007). Jornadas de Derecho Penal. Debido proceso y medidas de coerción personal. (1ra Edición). Venezuela. Editorial PUBAC. Recuperado de:

https://books.google.com.pe/books?id=H4JR_XxbI34C&pg=PA339&dq=prisi%C3%B3n+preventiva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZtOXJzMPjAhWMslkKHWCzBbM4FBD0AQg4MAQ#v=onepage&q=prisi%C3%B3n%20preventiva&f=false

ANEXO 1: MATRIZ DE CATEGORIZACION

TÍTULO: CRITERIOS DEL JUEZ EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 4, ARTICULO 202° DEL DELITO DE USURPACIÓN DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA, REGION CALLAO 2018.

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA	PROBLEMA DE INVESTIGACION	OBJETIVOS DE INVESTIGACION	CATEGORÍAS	SUBCATEGORIA	FUENTE	TECNICA	INSTRUMENTO
El nuevo código procesal penal comprende garantías para la seguridad jurídica de los procesados, además instituciones que aseguran que en la arbitrariedad para aplicar la medida de prisión preventiva desconoce principios universales como lo es la presunción de inocencia por ellos surge una problemática social y jurídica que es la privación de la libertad del investigado que afecta derechos fundamentales del imputado vulnerando diversos principios procesales como el principio de razonabilidad proporcionalidad celeridad procesal vulnerando la presunción de inocencia que manifiesta que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario a través de una sentencia firme finalmente la correcta aplicación de la prisión preventiva evitará que la persona sea	PROBLEMA GENERAL ¿Cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?	OBJETIVO GENERAL Determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.	Fundados y graves elementos de convicción	-Indicios personales -Indicios temporales -Indicios concomitantes	Distrito judicial de Lima Norte	Entrevistas Fuentes documentarias	Guía de preguntas de entrevista Ficha de análisis de fuente documental
	PROBLEMA ESPECIFICO 01 ¿En qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?	OBJETIVOS ESPECIFICOS 01 Determinar en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.	Pena probable	-Principio de proporcionalidad -Principio de lesividad			
	PROBLEMA ESPECIFICO 02 ¿De qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?	OBJETIVOS ESPECIFICOS 02 Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.	Peligro de fuga	-Arraigo laboral -Arraigo familiar -Gravedad de la pena -Daño causado			
	PROBLEMA ESPECIFICO 03 ¿En qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el	OBJETIVOS ESPECIFICOS 03 Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el	Peligro de obstaculización	- Destrucción de los elementos - Influencia en los comportamientos			

privada de su libertad y no se ha recluso injustamente evitando que se vulnera sus derechos fundamentales respetando el debido proceso	delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?	delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte					
	PROBLEMA ESPECIFICO 04 ¿En qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?	Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.					

CATEGORÍAS	SUBCATEGORIA	Items
Fundados y graves elementos de convicción	- Indicios temporales	¿En su condición de Magistrado, cuáles serían los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?
	- Indicios concomitantes	¿Cuál es su postura ante el criterio de requerir la prisión preventiva como ultima ratio investigado en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?
	- Indicios personales	¿Según su criterio, en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influiría en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte? ¿Cree usted que el fiscal de la investigación preparatoria, al momento de requerir la prisión preventiva, corrobora adecuadamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción como son los Indicios personales, Indicios temporales e Indicios concomitantes en el delito de robo agravado? ¿Por qué?
Pena probable	- Principio de proporcionalidad	¿Según su criterio, los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulneran el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte? ¿Considera usted que el juez tiene en cuenta el Principio de Proporcionalidad al momento de calificar la pena probable, para la prisión preventiva en el delito de robo agravado al emitir su resolución? ¿Por qué?

Peligro de fuga	- Arraigo laboral	¿Según su criterio como abogado, en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?
	- Gravedad de la pena - Daño causado	¿Considera usted que la prisión preventiva vulnera el derecho fundamental de la libertad, al no ser declarado judicialmente culpable mediante una sentencia firme?
	- Arraigo familiar	¿Cree usted que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo, garantiza la efectividad de la justicia penal en el delito de robo agravado? ¿Por qué? ¿Considera usted, que el daño causado que podría producirse por el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado?
Peligro de obstaculización	- Definición	¿Según su criterio, en qué medida la valoración del peligro de obstaculización, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?
	- Supuestos	¿Qué medios probatorios son susceptibles a destruirse o modificarse durante la investigación preparatoria en el delito de robo agravado?
	- Configuración	¿Qué elementos probatorios son relevantes en la prisión preventiva en el delito de robo agravado?

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

GUIA DE ENTREVISTA

**Dirigido a Especialistas
Judiciales.**

Título:

“Efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.”

Entrevistado :

Cargo :

Institución :

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuáles son los efectos del requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Preguntas:

1.- ¿En su condición de especialista, cuáles serían los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva en el investigado en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....
.....
.....
.....

2.- ¿Cuál es su postura ante el criterio de requerir la prisión preventiva como ultima ratio investigado en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....

.....

.....

.....

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1

Determinar en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte.

Preguntas:

3.- ¿Según su criterio, en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influiría en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....

.....

.....

.....

4.- ¿Cree usted que el fiscal de la investigación preparatoria, al momento de requerir la prisión preventiva, corrobora adecuadamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción como son los Indicios personales, Indicios temporales e Indicios concomitantes en el delito de robo agravado?

¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2

Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Preguntas:

5.- ¿Según su criterio, los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulneran el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....

.....

.....

.....

6.- ¿Considera usted que el juez tiene en cuenta el Principio de Proporcionalidad al momento de calificar la pena probable, para la prisión preventiva en el delito de robo agravado al emitir su resolución? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Preguntas:

7.- ¿Según su criterio como especialista, en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....

.....

.....

.....

8.- ¿Considera usted que la prisión preventiva vulnera el derecho fundamental de la libertad, al no ser declarado judicialmente culpable mediante una sentencia firme?

.....

.....

.....

.....

9.- ¿Cree usted que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo, garantiza la efectividad de la justicia penal en el delito de robo agravado? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

10.- ¿Considera usted, que el daño causado que podría producirse por el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado?

.....

.....

.....

.....

OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Preguntas:

11.- ¿Según su criterio, en qué medida la valoración del peligro de obstaculización, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

.....

.....

.....

.....

12.- ¿Qué medios probatorios son susceptibles a destruirse o modificarse durante la investigación preparatoria en el delito de robo agravado?

.....

.....

.....

.....

13.- ¿Qué elementos probatorios son relevantes en la prisión preventiva en el delito de robo agravado?

.....

.....

.....

.....

Anexo 3: Entrevistas

Pregunta N° 1: ¿En su condición de Magistrado, cuáles serían los efectos producidos a partir del requerimiento de prisión preventiva en el investigado en el delito de robo agravado en el Judicial de Lima Norte?

Tabla N°.1

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Los efectos producidos a partir de un requerimiento de prisión preventiva consisten en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia, no lo que, el requerimiento deberá cumplir con los presupuestos que elige dicha medida coercitiva.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Los efectos que se producen es que cumpla con las garantías de ley del procesado o imputado a fin de que verifique que se cumplan con todos los presupuestos establecidos en el artículo 268 del NCPP, y en relación al

		daño causado por la comisión del Robo Agravado.
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	Los efectos serian que muchas de las personas terminen recluidas en un centro penitenciario, toda vez que no esté llevando con legalidad la verificación de cada uno de los presupuestos, observando que se lleve un debido proceso de acuerdo a la constitución política del Perú regulado en el artículo 139 inciso 3.
Rosa Conopuma Genezbroso	Juez	Considero que muchas veces, los efectos terminan siendo negativos para los imputados, toda vez que su defensa técnica no acredita con presentar los medios probatorios o arraigos que evite que el imputado lleve su proceso en total libertad con las garantías mínimas que establece la ley.
Verónica Torres Cuadros	Juez	En mi opinión considero que los efectos de la prisión son positivos siendo que este coadyuva para que llegue al esclarecimiento de la

		<p>verdad, evitando muchos obstáculos en el proceso se realiza en el delito de robo agravado toda vez que este delito es bien frecuente.</p>
<p>Valery Raúl Romero Palacios</p>	<p>Juez</p>	<p>Considero que no existe un efecto negativo, porque en el requerimiento de Prisión preventiva es facultad del Juez efectuar un control de legalidad sobre el mismo, amparando o desistimiento la pretensión del Ministerio Publico</p>
<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>Teniendo en cuenta que el delito de robo agravado la pena oscila entre los 12 a 20 años de pena privativa de libertad, el fiscal tendría que solicitar la prisión preventiva, siendo potencialmente probable que el Juez de Investigación Preparatoria acoja dicho requerimiento, por tanto, los efectos para el imputado serían negativos, ya que tendría que afrontar el proceso en prisión. En cuanto a los presupuestos materiales que establece el Art. 268 del Código</p>

		<p>Procesal Penal, el Ministerio Público tiene que fundamentar cada uno de ellos, en especial “la existencia de fundados y graves elementos de convicción”, así como sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización”</p> <p>Si el requerimiento de la prisión preventiva se encuentra bien sustentada y ésta en audiencia es resuelta por el juez dictando la prisión preventiva, por lo que esta decisión si se encuentra bien fundamentada, entonces no tendría ningún efecto negativo para el derecho, más aún si esta decisión es confirmada por el Superior, en cambio esta decisión siempre va a ser negativo para el procesado, sobre todo cuando alega inocencia.</p> <p>Otros de los efectos nocivos para el Estado, es cuando la administración de justicia al hacer uso discriminado de la prisión preventiva acoge este</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		pedido, sin mayor sustento y valoración, hace que se incremente la población penitenciaria, lo que genera diversos problemas sociales y económico para el Estado.
Roser Ruiz Valencia Garriozo	Abogado	<p>Los efectos producidos a partir de un requerimiento de prisión preventiva consisten en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal, en donde un imputado o imputados tengan la actitud de sustraerse de la justicia, por lo que, el requerimiento deberá cumplir con los presupuestos que exige tal medida coercitiva.</p>
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	<p>Los efectos siempre serán negativos, ya que el requerimiento de prisión preventiva es la más gravosa de entre todas las medidas de coerción personal y es indispensable contratar un buen abogado que denomine los alcances de la prisión preventiva.</p>

<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>Los primeros efectos en un requerimiento de Prisión Preventiva, es la privación de la Libertad temporal, que busca el Titular de la Acción Penal, para el aseguramiento de su concurrencia a Juicio.</p> <p>El segundo efecto es que también se ven afectados los familiares, en razón que tendrán que realizar visitas al Penal, frente a ello lo que se llama el drama familiar, por el requerimiento de Prisión preventiva.</p> <p>El tercer efecto es que, si el juez de garantía da la razón al Titular de la acción Penal, siendo el delito de Robo Agravado será no menor de 9 meses, prolongables a 18 meses de Prisión preventiva.</p> <p>Debe tener presente que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal</p>
-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		durante un lapso más o menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal.
Conclusión	<p>Todos los entrevistados, coinciden en que los efectos del requerimiento de prisión preventiva, consiste en garantizar la eficacia de una investigación o proceso penal instaurada en contra de un imputado que tenga la actitud de sustraerse del sistema de justicia, sin embargo, el entrevistado N° 9, manifiesta, que los efectos siempre serán negativos, ya que el requerimiento de prisión preventiva es la más gravosa de entre todas las medidas de coerción personal.</p>	

Pregunta N° 2: ¿Cuál es su postura ante el criterio de requerir la prisión preventiva como ultima ratio investigado en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

Tabla N°. 2

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	<p>La postura está orientada a que la restricción de la libertad ambulatoria, debe ser afectada, siempre y cuando, un requerimiento de prisión preventiva se encuentre sustentada a la luz del artículo 268 del NCPP., en concordancia con la Casación 626-2013- Moquegua; siendo estos presupuestos los siguientes:</p> <p>a) Que, existan graves y fundados elementos de convicción, b) La pena de imponerse supere los 4 años de pena privativa de libertad, c) Exista peligro de fuga o de obstaculización probatoria. Además, es la observancia obligatoria de 2 presupuestos adicionales, estos son: A) Proporcionalidad de la medida y su duración.</p>

		<p>Todos ellos deberán concurrir, afecto de que se declare fundada esta medida coercitiva.</p>
<p>Yoel Valverde Silva</p>	<p>Fiscal Provincial</p>	<p>En mi opinión considero que la prisión preventiva debe ser aplicado como ultima ratio, pero en la actualidad se aplica constantemente, con el objetivo de resguardar o evitar el peligro procesal a fin de que el imputado sea juzgado con elementos de convicción que acrediten la comisión del delito como es el caso del robo agravado.</p>
<p>Marco Antonio Santa Cruz Urbina</p>	<p>Fiscal Provincial</p>	<p>El criterio que considero en mi experiencia personal, antes de requerir la aplicación de prisión preventiva es primero verificar el cumplimiento de los presupuestos materiales tipificado en el artículo 268 del NCPP, y los precedentes vinculantes respecto de otros temas similares.</p>

<p>Rosa Conopuma Genebroso</p>	<p>Juez</p>	<p>Como jueza he podido evaluar o calificar el requerimiento de prisión efectiva requerido por el Fiscal, observando en reiterados procesos que los fiscales que requieren prisión preventiva no tienen suficientes elementos probatorios que ampare su pretensión, siendo que muchos de ellos terminan siendo desestimado en su pedido.</p>
<p>Verónica Torres Cuadros</p>	<p>Juez</p>	<p>Los procesos de prisión preventiva requerido por el Fiscal, deben estar debidamente motivado, y solicitar su aplicación como ultima ratio, buscando así otras medidas menos gravosas, que eviten la restricción de su libertad, y pueda llevar el proceso en libertad hasta que se emita una sentencia final.</p>
<p>Valery Raúl Romero Palacios</p>	<p>Juez</p>	<p>La prisión preventiva es excepcional, si no la regla general la comparecencia.</p>

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>Según la doctrina y la jurisprudencia, señala que la prisión preventiva es una medida coerción excepcional y extrema y tal como lo dijera el profesor San Martín “nunca la sola gravedad del hecho justifica la prisión preventiva”, partiendo de esta premisa, considero que el Ministerio Público ha hecho uso y abuso de esta facultad de requerir prisión preventiva por cualquier delito que supere los 4 años de pena privativa de libertad, sin tener en cuenta que los presupuestos materiales deben ser concurrentes y no aislados o ajenos al resto, dejando de lado o minimizando en muchos casos el tercer presupuesto referido al peligro de fuga y al peligro de obstaculización, medida que se ve incrementada en los delitos patrimoniales como es el de robo agravado que tiene mayor</p>
----------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		incidencia delictiva según las estadísticas y por este tipo penal el que tiene mayor porcentaje en prisión preventiva.
Roser Ruiz Valencia Garriozo	Abogado	El criterio para su requerimiento debe estar sustentados a la luz del artículo 268 del nuevo Código Procesal penal en concordancia con la casación 626-2013- Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración, lo cual deberá ser observado por los operadores de justicia, a efecto de que se declare fundada esta medida coercitiva
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	Evidentemente es necesario que estudiemos que no existe otra medida menos gravosa que cumpla los mismos objetivos de la prisión preventiva, siendo necesario siempre analizar la proporcionalidad.

<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>La solicitud de Prisión preventiva como Última Ratio, se da cuando existe un eminente peligro de fuga u obstaculización a la actividad probatoria, por parte del Imputado o pueda interceder en la víctima, testigos o peritos.</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Todos los entrevistados, coinciden en que el requerimiento de prisión preventiva, es una medida de ultima ratio, por lo tanto, la libertad ambulatoria, debe ser afectada, siempre y cuando, un requerimiento de prisión preventiva se encuentre sustentada a la luz del artículo 268 del NCPP., en concordancia con la Casación 626-2013-Moquegua, en donde se precisa 2 presupuestos materiales adicionales, estos son proporcionalidad de la medida y su duración. Además, el entrevistado N°9 señala que es una medida de ultima ratio, y no existe otra medida menos gravosa que cumpla los mismos objetivos de la prisión preventiva, siendo necesario siempre analizar la proporcionalidad.</p>	

Pregunta N° 3: ¿Según su criterio, en qué medida la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influiría en el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

Tabla N°.3

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	El presupuesto relacionado a la existencia y fundados elementos de convicción, que establecen la realidad de un hecho de relevancia penal y que el sujeto esté vinculado; permiten afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida. Por tanto, el requerimiento debe contener una cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis inculpativa.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Si existen elementos graves y fundados que acreditan la comisión de un hecho delictivo siendo que los efectos recaerían que el imputado lleve su proceso recluido en un centro penitenciario, hasta el

		<p>esclarecimiento del caso respecto del delito de robo agravado es una tipificación muy usual actual en la sociedad.</p>
<p>Marco Antonio Santa Cruz Urbina</p>	<p>Fiscal Provincial</p>	<p>En mi experiencia como fiscal provincial titular, al momento de requerir la prisión preventiva brindamos elementos de convicción suficientes y fundados, pero la defensa técnica del imputado trata de desvirtuar los fundamentos del fiscal, acreditando los arraigos.</p>
<p>Rosa Conopuma Genebroso</p>	<p>Juez</p>	<p>En mi calidad de Jueza de investigación preparatoria, puedo manifestar que muchas veces existe la acreditación de los elementos de convicción, pero la defensa del imputado cuestiona la validez, presenta y acredita los arraigos con el fin de que no se cumpla todos los presupuestos establecidos en el código procesal penal.</p>

Verónica Torres Cuadros	Juez	Los elementos de convicción deben ser valorados con cautela y pasar por un filtro riguroso que sea difícil cuestionar su validez u obtención, a fin de evitar que la teoría del caso del fiscal sea desvirtuada.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Influye mucho, porque el marco de imputación que formule el Ministerio Público tiene que ser congruente y evidente con los elementos de convicción y que estos son graves y fundados, si no hay imputación concreta no puede declararse fundada la prisión preventiva.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	Este primer presupuesto es quizás uno de los más importantes, pero la valoración para requerir la prisión le corresponde al Ministerio Público, así como la valoración que efectúa el Juez para acoger o no dicho requerimiento, que necesariamente debe

		<p>conurrencia con los otros presupuestos materiales, cuando por la práctica se sabe que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial muchas veces su decisión está centrada en la pena que le corresponde al tipo penal que afronta el procesado, restándole importancia a los otros presupuestos relativos al peligro de fuga y al peligro de obstaculización.</p> <p>Finalmente, el primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción, es el que va a demostrar la materialidad del delito y la presunta responsabilidad del procesado, lógicamente, después de las etapas preclusivas de investigación preparatoria, etapa intermedia o de control y la etapa de juzgamiento. Pero de existir mayores elementos de convicción que vinculen al imputado como</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>autor, definitivamente va a ser este elemento el que va a inclinar la decisión que deba adoptar el Juez, pero esta decisión según la doctrina y la jurisprudencia debe estar a la par con los otros presupuestos, no solo para dictar prisión preventiva, sino quizás otra medida menos gravosa como el uso del grillete electrónico.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>La apreciación de los indicios razonable de criminalidad en la fase de investigación preparatoria significa la existencia de motivos razonables que permitan afirmar la posible comisión de un delito por eleventual destinatario de la medida, que supongan una relación directa con el imputado. Deben concurrir varios elementos de convicción e indicios que construyan una base de cognición sólida.</p>

<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>En el delito de robo agravado es esencial vincular la violencia o amenaza al agraviado con el autor del delito, influye en el requerimiento porque es uno de los presupuestos para declarar fundado la prisión preventiva.</p>
<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>La valoración de los fundados y graves elementos de convicción tiene impacto directo en la debilidad e inconsistencia de los fundamentos de la decisión judicial; característica inherente al autoritarismo inquisitivo</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Todos los entrevistados, coinciden en que la valoración de los fundados y graves elementos de convicción, influye en cuanto los elementos dados, permitan afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida, por eso el requerimiento debe contener una cognición sólida, una vez advertido los elementos de convicción que sustenta la tesis incriminatoria, y se pueda</p> <p>Construir una base de cognición sólida, para el requerimiento de la prisión preventiva. Así mismo, señalan que es esencial vincular la violencia o amenaza al agraviado con el autor del delito, como uno de los presupuestos para declarar fundado la prisión preventiva.</p>	

Pregunta N° 4: ¿Cree usted que el fiscal de la investigación preparatoria, al momento de requerir la prisión preventiva, corrobora adecuadamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción como son los Indicios personales, Indicios temporales e Indicios concomitantes en el delito de robo agravado? ¿Por qué?

Tabla N°.4

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Por supuesto que sí, ya que cada presupuesto estipulado en el artículo 268 del NCPP, debe estar plenamente corroborado, además de toarse en consideración los fundamentos de la casación de Moquegua (Exp. N°626- 2013); todo ello con el propósito de no expedirse una resolución judicial arbitraria o carente de motivación que devenga en la vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	El fiscal cuando solicita o requiere la aplicación de la medida de coerción de prisión preventiva, verifica que se haya cumplido con los presupuestos asimismo

		que dichos elementos crearan convicción al juez antes de emitir su fallo ajustado a la legalidad.
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	Ejerciendo el cargo de fiscal titular en los distintos procesos he podido observar un punto débil es que muchas veces el requerimiento del fiscal carece de motivación, siendo que no cuentan con indicios fehacientes que prueben el delito de robo agravado en contra del imputado.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Como jueza de la investigación preparatoria durante del desarrollo de la audiencia de prisión preventiva los fiscales requieren dicha medida sustentando sus fundamentos en indicios personales, temporales, concomitantes pero que no logran crear convicción ante el juez o jueces que evalúan el proceso.

Verónica Torres Cuadros	Juez	indicios, mas no en un elemento de convicción consistente que acredita la perpetración de un hecho delictivo, siendo en este caso el robo agravado un delito habitual en la sociedad donde la prisión preventiva se ve desnaturaliza toda vez que su aplicación se realiza de manera constante.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Influye mucho, porque el marco de imputación que formule el Ministerio Público tiene que ser congruente y evidente con los elementos de convicción que estos son graves y fundados, si no hay imputación concreta no puede declararse fundada la prisión preventiva.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	Creo que por el escaso tiempo que tiene el Ministerio Público para decidir si solicita o no la prisión preventiva, muchas veces le da más importancia al segundo presupuesto de la sanción

		<p>que le corresponde por el tipo penal, por tanto, en la etapa preliminar tanto el Ministerio Público y la policía solo se dedican a acopiar pruebas e indicios de cargo, de esta forma reforzar su pretensión de requerimiento de prisión preventiva, muchas veces olvidando el Ministerio Público que no solo es el titular de la legalidad, sino también de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, aunado a ello restando importancia a los documentos de la defensa cuya pretensión es desvirtuar el tercer presupuesto de peligro de fuga y del peligro de obstaculización.</p> <p>Respecto a los indicios antecedente, temporales y concomitantes, considero que los presenta el Ministerio Público para sustentar su pretensión como un resumen de los fundamentos facticos,</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pero se debe tomar como un acto de postulación que tiene la fiscalía, ya recién en la etapa de investigación las partes procesales (Ministerio Público y defensa) tendrán la oportunidad de probar la existencia de tales indicios.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Se entiende que sí, porque el objeto de la formalización y continuación de la investigación preparatoria es recabar las pruebas de cargo y descargo. Si son de cargo, verifican si estos tienen la intensidad de graves y fundados.</p>
<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>Debería ser la regla el verificar si concurre o no los graves elementos de convicción, sin embargo, muchas veces no es así, ya que los fiscales actúan por presión mediática o simplemente porque no han hecho un verdadero análisis de los elementos de convicción.</p>

<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>Se debe tener presente que el Titular de la acción penal muchas veces realizan su requerimiento bajo presión de la prensa y de acuerdo a lo establecido en la norma procesal, es por ello que muy pocas veces corroboran adecuadamente la existencia de los fundados y graves elementos de convicción, máxime si tenemos en cuenta la mayoría de los señores fiscales son provisionales sin experiencia y no hacen una verdadera valoración sobre los indicios, así como los concomitantes en el delito de robo agravado, muchas veces con la sola sindicación solicitan la prisión preventiva sin tener mayores elementos de convicción.</p>
-------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Conclusión</p>	<p>De las respuestas de los entrevistados, se puede deducir que, para requerir la prisión preventiva, debe corroborarse cada además de tomarse en consideración los fundamentos de la casación de Moquegua (Exp. N°626-2013); todo ello con el propósito de no expedirse una resolución judicial arbitraria o carente de motivación. Sin embargo, algunos entrevistados sostienen que no hacen un verdadero análisis de los elementos de convicción, por ende, actúan por presión mediática. Sin embargo, otros entrevistados difieren, en el contexto que muchas veces los Fiscales realizan surequerimiento bajo presión de la prensa y de acuerdo a lo establecido en la norma procesal, es por ello que muy pocas veces corroboran adecuadamente la existencia de los fundados y graves elementos de convicción, además, muchas veces los fiscales son provisionales sin experiencia y no hacen una verdadera valoración sobre los indicios, así como los concomitantes en el delito de robo agravado.</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo específico 2:

Determinar de qué manera los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Pregunta N° 5: ¿Según su criterio, los efectos del requerimiento de prisión preventiva vulneran el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

Tabla N°.5

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Claro que no, los efectos del requerimiento no necesariamente vulneran el principio de proporcionalidad, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva para que sea otorgada. Por consiguiente, en cuanto, si considera este principio de proporcionalidad, el Juez al momento de tomar conocimiento de un requerimiento de prisión preventiva, llevará

		<p>a cabo una audiencia en donde las partes involucradas intervendrán, así mismo se revisará y analizará si los medios de prueba ofrecidos con motivo de determinarse si existe la necesidad de conceder dicha medida de coerción. En ese orden de ideas. Se deduce que los operadores jurídicos obran en concordancia al principio de proporcionalidad, para lo cual verifican la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.</p>
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	<p>En mi experiencia puedo manifestar que la prisión preventiva se ha visto desnaturalizado siendo que su aplicación se da de manera continua siendo que este se aplica de manera excepcional, y más aún si se trata de robo agravado, un delito que es cometido muy seguido en la sociedad, siendo que su aplicación debe estar sujeto al principio de proporcionalidad y demás principios protegidos por la constitución.</p>

Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	El principio de proporcionalidad es una garantía constitucional que rige todo el proceso de prisión preventiva, valorándose adecuadamente en qué medida será efectiva la prisión preventiva en el delito de robo agravado.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Respecto a la prisión preventiva, al momento de su aplicación debe regirse por una serie de principios, como el principio de proporcionalidad y razonabilidad al momento de aplicar una pena y respetar las garantías constitucionales.
Verónica Torres Cuadros	Juez	Considero que el principio de proporcionalidad es sumamente relevante e importante en el proceso penal toda vez que este principio evita que el imputado se vea vulnerado en su derecho a que se lleve a cabo un proceso justo con todas las garantías.

<p>Valery Raúl Romero Palacios</p>	<p>Juez</p>	<p>Considero que no, porque si bien el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar judicialmente la pena, realizando un procedimiento valorativo y llegar a una posible pena concreta. En cuanto, si considera este principio de proporcionalidad, Considero que si porque se exige ponerse en el estadio de determinar parcialmente la pena y debe aplicar los principios, no solo de proporcionalidad, sino además el principio de legalidad y humanidad de las penas.</p>
<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>Cuando el requerimiento de prisión preventiva se encuentra bien sustentado, con sólidos argumentos, de pruebas de cargo y/o indicios antecedentes. Concomitantes y posteriores que realmente vinculen al procesado como</p>

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>autor del ilícito, entonces no habría vulneración al principio de la proporcionalidad de la pena, puesto que el requerimiento de la prisión que va de la mano con la formalización de la investigación preparatoria, se espera una posible condena que finalmente en el juzgamiento se resolverá el quantum de la pena, atendiendo a los presupuestos de las carencias sociales, económicas, a la responsabilidad restringida y otros como circunstancias sea atenuantes o agravantes, que inclinará la postura a favor de la pretensión del Ministerio o de la defensa para lograr una condena por debajo del mínimo legal e inclusive una pena suspendida.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Una vez otorgada o declarada fundada la prisión preventiva, es de advertirse que para que se haya concedido el requerimiento</p>

		<p>que efectúa el representante del Ministerio Público previamente se evalúa la proporcionalidad de la medida coercitiva, la misma que a su vez se desarrolla a través de sus tres sub-principios: Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad no vulnera los efectos del requerimiento. En cuanto, si considera este principio de proporcionalidad, el Juez al momento de conceder su requerimiento de prisión preventiva, dispondrá la realización de una audiencia donde las partes intervendrán, es más se revisará y analizará los medios de prueba ofrecidos, con motivo de que se demuestre de que existe la necesidad de conceder la medida de coerción, a fin de que se cumplan con los fines del sistema de justicia</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>No, si se declarase fundado la prisión preventiva, así parecería una pena anticipad en realidad no lo es, solo es una medida para asegurar los fines del proceso, y la proporcionalidad de la pena se debe estudiar al momento de condenar al imputado. En cuanto, si considera este principio de proporcionalidad, en teoría debería tener en cuenta el principio antes mencionado, sin embargo, así como tenemos muy buenos magistrados, también existen los magistrados que no se preparan constantemente, por lo que su decisión muchas veces es arbitraria.</p>
<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>No vulnera el principio de proporcionalidad de la pena en el delito de Robo agravado, teniendo en cuenta que la pena por dicho delito es no menor de 12 ni mayor de 25 años de pena privativa de la libertad</p>

		de la libertad y en la gran mayoría el fiscal solicita 9 a 18 meses de prisión preventiva la misma que s temporal y no permanente.
Conclusión	<p>Todos coinciden que el requerimiento no necesariamente vulnera el principio de proporcionalidad, puesto que en muchos casos los operadores jurídicos emiten resoluciones judiciales debidamente motivadas, llegando a observar presupuestos que exige este tipo de medida coercitiva, considerando que el quantum punitivo del tipo penal de robo con agravantes es no menor de 12 años, por lo tanto, es deber del juzgador situarse en el estadio de determinar judicialmente la pena. Sin embargo, algunos entrevistados manifiestan que existen los magistrados que no se preparan constantemente, por lo que su decisión muchas veces es arbitraria.</p>	

Pregunta N° 6: ¿Considera usted que el juez tiene en cuenta el Principio de Proporcionalidad al momento de calificar la pena probable, para la prisión preventiva en el delito de robo agravado al emitir su resolución? ¿Por qué?

Tabla N°.6

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Considero que si cumple con aplicar el principio de proporcionalidad, caso contrario se estaría inobservando la normativa procesal penal vigente. Asimismo, la expedición de un auto de prisión preventiva debe estar debidamente motivado a la luz de las garantías constitucionales que asisten a las partes justiciables.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Siendo este un problema puedo advertir que en reiteradas ocasiones se ve vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad al momento de resolver la problemática de la prisión preventiva.
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	El principio de proporcionalidad es un tema muy discutido, toda vez que no hay un criterio uniforme

		por parte de los fiscales, siendo que al momento de requerir el juez debe verificar la aplicación de los principios.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	En el proceso de requerimiento de prisión preventiva debe ser analizado con cuidado, pasando por un filtro riguroso, evaluando el principio de oportunidad y demás principios que regulan todo el proceso.
Verónica Torres Cuadros	Juez	El juez debe estar al tanto de todos los elementos que sustenten el requerimiento de prisión preventiva, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad para su aplicación de manera legal.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Desconozco, pero entiendo que deben plasmarlo en la resolución.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	defensa, entonces el Juez no lo objeta ni cuestiona, por tanto, cuando le corresponde pronunciarse por el segundo presupuesto solo dice que esta cumple con el mismo, em razón de que el tipo penal de robo agravado oscila entre los 12 años y como pena máxima 20 años pena privativa de

		libertad, por tanto, no hace mayor comentario. Lo que realmente va a inclinar la decisión del Juez es el primer y tercer presupuesto material.
Roser Ruiz Valencia Garriozo	Abogado	Yo considero que si cumple, caso contrario estaría inobservando la normativa procesal penal vigente. Así mismo la expedición de un auto de prisión preventiva, debe estar debidamente motivado.
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	La pena en el delito de robo agravado ya de por sí, es allá en consecuencia casi siempre superará los 4 años al analizar la prognosis de la pena, la proporcionalidad no está dirigida a evaluar la prognosis de la pena si no en el peligro procesal.
Raúl Rubén Soto Aranda	Abogado	En algunos casos el Juez de garantía es decir el Juez de InvestigaciónPreparatoria o el Colegiado, si tienen en cuenta, teniendo en cuenta los artículos 45 y 46del código penal, para la aplicación de los tercios al momento de emitir su fallo.

<p>Conclusión</p>	<p>Todos los entrevistados, coinciden en que, si se aplica el principio de proporcionalidad, caso contrario se estaría inobservando la normativa procesal penal vigente, por otro lado, sostienen que el delito de robo agravado supera los 4 años de pena al analizar la prognosis de la pena, sin embargo, la proporcionalidad no está dirigida a evaluar la prognosis de la pena si no en el peligro procesal. Por otro lado, un entrevistado desconoce el tema.</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo específico 3:

Determinar en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Pregunta N° 7: ¿Según su criterio como abogado, en qué medida la valoración del peligro de fuga, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

Tabla N°.7

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Debemos entender que el peligro de fuga, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	El peligro procesal dentro del proceso penal es un tema discutido, siendo que el peligro de fuga es una institución relevante para determinar si aplica la prisión preventiva o si amerita a desarrollar su proceso en libertad.

Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	En mi opinión considero que el peligro de fuga es indispensable para requerir su aplicación, es por ello que si existe dicho peligro se le privaría de la libertad al imputado.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	El peligro de fuga es un tema crucial que está relacionado con la restricción de la libertad siendo que con la acreditación de esta configuraría dicha medida.
Verónica Torres Cuadros	Juez	En el delito de robo agravado es un tema común, viendo que este delito es un poco probable que el imputado quiera sustraerse del proceso, teniendo en consideración el daño causado.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Considero que no se vulnera, siempre y cuando el análisis del peligro de fuga se haga en datos objetivos y según el caso en concreto, además que la constitucionalidad de la Prisión Preventiva encierra el deber estatal de perseguir eficazmente los delitos.

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>El tercer presupuesto material que consta del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; si bien la doctrina y la jurisprudencia obliga a que los tres presupuestos deben ser tomados en cuenta, por tanto, estas deben ser concurrentes (tal como señala la propia norma, Art. 268 del CCP), pero la práctica procesal que se ve a diario, nos revela que en la mayoría de decisiones judiciales solo se tiene en cuenta el primer y segundo presupuesto, dejando delado el último presupuesto, como si este fue de menor jerarquía o de menor importancia, es ahí cuando se vulnera el derecho a la libertad personal, que implica que el deber del juez de motivar adecuadamente sus resoluciones, ya que una decisión desproporcionada, podría repercutir en la decisión final del juez de juzgamiento.</p>
----------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Como ejemplo tenemos el caso de Ollanta Humala y esposa que tenía presión preventiva, finalmente el Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus, logro su libertad, básicamente cuestionando las decisiones judiciales en cuanto al tercer presupuesto los mismos que no fueron sustentados debidamente.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Entendemos en primer lugar que el peligro de fuga, es una potencialidad razonable de fuga, es decir, la intención del imputado de sustraerse de la acción de Lajusticia. En ese orden de ideas, la valoración del peligro de ninguna manera vulnera el derecho fundamental a la libertad, ello en razón de que, se le concede la posibilidad al imputado (s) demostrar con prueba documental de que su conducta o situación no se encontraría dentro del supuesto del de peligro de fuga.</p>

Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	La libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.
Raúl Rubén Soto Aranda	Abogado	Se debe tener presente la valoración del peligro al momento de dictarse prisión preventiva y se acredite el peligro procesal. ¿Pueden los jueces dictar prisión preventiva si el encausado no acredita tener estabilidad laboral? ¿Puede alegarse "riesgo de fuga" si el procesado registra múltiples viajes al extranjero? ¿Procede la medida si el arraigo familiar es de "mediana intensidad"? ergo, no se estaría vulnerando el derecho a la libertad teniendo en cuenta que la investigación es por el delito Contra el patrimonio.
Conclusión	Las entrevistas permitieron determinar que los entrevistados consideran el peligro de fuga como una potencialidad razonable de fuga, además coinciden en que, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga.	

Pregunta N° 8: ¿Considera usted que la prisión preventiva vulnera el derecho fundamental de la libertad, al no ser declarado judicialmente culpable mediante una sentencia firme?

Tabla N°.8

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Según mi apreciación y teniendo presente la jurisprudencia nacional, considero que esta medida coercitiva, en algunos casos excepcionales es necesario su aplicación, pese a que luego de un proceso penal, se hubiese obtenido una sentencia absolutoria. Por lo tanto, la adaptación a la que se hace alusión dependerá en cada caso en particular, ya que son varios factores que llevan al Juez a conceder dicha medida.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	A criterio personal considero que el derecho fundamental a la libertad se ve vulnerado en parte toda vez que el imputado no es declarado responsable judicialmente.

Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	La libertad se ve restringida por causas de justificación siendo que la prisión preventiva debe estar debidamente fundamentada
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	En mi calidad de jueza, pienso que se vulnera la libertad, pero solo en casos excepcionales que acrediten elementos contundentes para su reclusión en una prisión.
Verónica Torres Cuadros	Juez	Siendo el juez el que controla y verifica todo el proceso de investigación de la prisión preventiva, este puede ser aplicado cuando cumple con los presupuestos del código procesal penal y los demás establecidos en la casación Moquegua 626-2013.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	No, porque es excepcional, variable e instrumental, además la constitucionalidad de la prisión preventiva el deber estatal eficazmente los delitos.

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>Cuando la prisión preventiva fuese requerida con las exigencias de ley y fuese resuelta por la debida motivación judicial, no tendría por qué vulnerar el derecho a la libertad, ya que esta institución jurídica del derecho procesal penal está regulado y normado como mecanismo de protección y aseguramiento para el logro exitoso del proceso en su totalidad, ahora si bien es cierto que el procesado tiene la condición de aun inocente, esta medida de coerción personal, no necesariamente es para catalogarlo como ya responsable del ilícito, puesto que es solo es una medida excepcional y extrema, pero como ya vemos a la puesta en práctica de esta medida desde el año 2006 se ha visto el uso desmedido que solo trajo cuestionamientos no solo de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional incluso de la</p>
----------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso desmedido e irregular de la prisión preventiva en el Perú y en América Latina. Aunado a ello a raíz del cuestionamiento del caso Keiko Fujimori, está pendiente resolver en la Corte Suprema el XI Pleno Supremo Penal 2019 sobre la prisión preventiva.</p> <p>Como ejemplo tenemos el caso de Ollanta Humala y esposa que tenía presión preventiva, finalmente el Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus, logro su libertad, básicamente cuestionando las decisiones judiciales en cuanto al tercer presupuesto los mismos que no fueron sustentados debidamente.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Según mi opinión, considero que la prisión preventiva en algunos casos es necesaria, pese a que a lo largo de un proceso penal se hubiese obtenido una sentencia absolutoria.</p>

		<p>Tal razonamiento es correcto, debido a que los operadores jurídicos están en la obligación de verificar que todos los presupuestos de la prisión preventiva concurra.</p>
<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>No, no la vulnera, pero si la limita, si una prisión preventiva se encuentra debidamente fundamentada no vulnera ningún derecho .</p>
<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>No vulnera el derecho fundamental de la libertad, en razón que la Prisión Preventiva es provisional ósea temporal y no permanente, más aún que no se discute la inocencia dado que se mantiene incólume hasta no ser sentenciado. Si no se cumplió con el objetivo durante la Prisión Preventiva se solicita la Libertad por exceso de carcelería que no significa que se absolverá, sino que llevará el proceso en libertad.</p>

<p>Conclusión</p>	<p>La entrevistas permitieron determinar los entrevistados coinciden en que la prisión preventiva en algunos casos excepcionales es necesaria su aplicación, pese a que luego de un proceso penal, se hubiese obtenido una sentencia absolutoria, Sin embargo, cuando la prisión preventiva fuese requerido con las exigencias de ley y fuese resuelta por la debida motivación judicial, no tendría por qué vulnerar el derecho a la libertad, si bien es cierto que el procesado tiene la condición de aun inocente, este medida de coerción personal, no necesariamente es para catalogarlo como ya responsable del ilícito, puesto que es solo es una medida excepcional y extrema.</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta N° 9: ¿Cree usted que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo, garantiza la efectividad de la justicia penal en el delito de robo agravado? ¿Por qué?

Tabla N°.9

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Considero que el requerimiento de prisión preventiva, no solo debe estar sustentado en el arraigo laboral, si no que a su vez este elemento debe ser corroborado con los otros presupuestos que exige esta medida coercitiva, a efecto de garantizar la efectividad de la justicia penal. También es importante considerar el arraigo familiar como aspecto valorado dentro del peligro procesal, es esencial que sea debatido en audiencia bajo la dirección de un juez imparcial, a fin de determinar o descartar la posibilidad de que el imputado se encuentre en una situación que pudiera devenir en la sustracción de la justicia.

Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Considero que sí, todos los arraigos son sumamente importantes al momento de calificar el supuesto.
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	Considero que el arraigo domiciliario, familiar, laboral y moral deben ser sólidos para enervar la presunción de fuga.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Considero importante todos los arraigos para enervar la presunción de fuga y hacer una correcta investigación
Verónica Torres Cuadros	Juez	Considero que si
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Considero que el arraigo domiciliario, familiar, laboral y moral deben ser sólidos para enervar la presunción de fuga.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	Los presupuestos materiales que prevé la norma tienen que ser concurrentes, por tanto, los tres son importantes para sustentar el requerimiento, pero en la realidad y en la práctica, tal como lo dijera líneas arriba, el tercer presupuesto es la que en

		<p>menor importancia tiene tanto para el fiscal como para el juez, pese a que estas tengan solidez y certeza para el juzgador, pero también es cierto que la mayoría de los que incurrir en el delito de robo agravado son reincidentes o habituales, por tanto, al juez no le queda otro camino que acoger el pedido fiscal. En este extremo del que vuelve a delinquir si estaríamos frente a la concurrencia del peligro de fuga, dejando de lado el arraigo sea familiar o laboral, pero cuando nos encontramos frente a una persona que es primario y las circunstancias denotan una grave necesidad y el medio en que se encuentra, entonces quizás estamos ante la no concurrencia de este tercer presupuesto material.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Considero es un aspecto que está comprendido dentro del presupuesto de peligro procesal, en tal sentido su efectividad va de la mano con la concurrencia conjunta de los otros presupuestos de la prisión preventiva. Además, el arraigo laboral generalmente refleja si un investigado se dedica o realiza actividades lícitas; no obstante, casi siempre la defensa de un investigado no lo sustenta adecuadamente; circunstancias que lleva al operador de justicia a dictar una medida de coerción, por el hecho que se avisaran indicios de que el imputado, tenga como forma de vida y de trabajo el accionar debido. Por otro lado, el arraigo familiar como aspecto valorado dentro del peligro procesal, es esencial que sea debatido en audiencia, a efecto de</p>
-------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		determinar si el imputado(s) no se haya en una situación que pudiera devenir en una sustracción de la justicia.
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	El peligro procesal se debe basar en el arraigo laboral, pero no solo en eso, pues en un país como el nuestro donde existe alto índice de desempleo, es muy difícil tener arraigo laboral de calidad. Además, es necesario considerar el arraigo familiar, pero no nos podemos basar únicamente en eso, porque cada vez es más común que se descompongan las familias, es decir debería ser más estudiado el arraigo familiar.
Raúl Rubén Soto Aranda.	Abogado	No garantiza absolutamente nada porque los arraigos lo único que da cuenta es que el investigado cumple con los requisitos formales de los arraigos, pero que eso no garantiza la efectividad de la justicia.

<p>Conclusión</p>	<p>Las entrevistas permitieron determinar que los entrevistados coinciden en que el requerimiento de la prisión preventiva en base al arraigo debe estar sustentado en el arraigo laboral, es decir debiendo este elemento ser corroborado con los otros presupuestos que exige esta medida coercitiva, a efecto de garantizar la efectividad de la justicia penal, así mismo el peligro procesal se debe basar en el familiar, debido a que cada vez es más común que se descompongan las familias. Por otro lado, otro entrevistado, sostiene que no garantiza absolutamente nada porque los arraigos lo único que da cuenta es que el investigado cumple con los requisitos formales de los arraigos, pero que eso no garantiza la efectividad de la justicia.</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta N° 10: ¿Considera usted, que el daño causado que podría producirse por el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva en el delito de robo agravado?

Tabla N°.10

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Claro que sí, ya que, si en caso el imputado se diera la fuga, ya sea viajando al extranjero o estando como no habido, tal situación traería como resultado que la parte agraviada no sea resarcido por el daño que se le ocasionó, además de que se fomentaría la impunidad.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Si, toda vez que se tiene valorar el daño causado para evaluar si este requiere o no prisión preventiva, siendo vital para el desarrollo de todo proceso.
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	Considero que no, porque muchas veces el daño causado es mínimo, y su calificación sería injusta si es que no ha cometido un hecho delictivo grave.

Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Pienso que si, al advertir que si es un peligro o daño de alto riesgo no habría duda de su perpetración de delito y seria merecedora de castiga y cabría la posibilidad de fuga.
Verónica Torres Cuadros	Juez	En mi opinión pienso que sí, toda vez que el daño es grave, estaríamos ante el riesgo de que el imputado quiera eludir a la justicia penal.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Considero que no, ya que la casación 631-2015-Arequipa establece que la gravedad de la pena y antigüedad del daño causa no puede ser argumentado para mejorar en forma automática la prisión.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	En principio los tres presupuestos materiales son importantes y estas deben ser concurrentes, siendo así el tercer presupuesto en el extremo del peligro de fuga también ser valorado debidamente no solo por el Juez, sino también por el

		<p>Fiscal, lo que últimamente estamos viendo que las máximas instancias judiciales como son la Corte suprema y el Tribunal Constitucional, le dan especial importancia a este tercer presupuesto, lo que acertadamente diría el profesor San Martín “nunca la gravedad del hecho justifica la prisión preventiva”, mensaje que da a entender que el tercer presupuesto recién está alcanzando un nivel de importancia al igual que los otros dos presupuestos.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Sí, porque si el procesado se escapó, es decir, se fugó traería en consecuencia que no se pueda cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento, por el daño ocasionado.</p>
<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>Sí, porque si estamos ante un verdadero delincuente, su fuga implicaría mayor índice de robo e inseguridad ciudadana.</p>

<p>Raúl Rubén</p> <p>Soto Aranda</p>	<p>Abogado</p>	<p>Preventiva no es una pena sino es una medida coercitiva temporal entonces no podemos hablar de una pena impuesta en la Prisión Preventiva. La pena a imponerse por gravedad del delito y el daño causado al bien jurídico protegido, es un riesgo del peligro de fuga, lo que hace que es un elemento fundamental para el pedido de la Prisión Preventiva.</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Las entrevistas permitieron determinar que los entrevistados difieren si el peligro de fuga, es un elemento importante a considerar para el requerimiento de prisión preventiva, por un lado, consideran que no, ya que la casación 631-2015-Arequipa establece que la gravedad de la pena y antigüedad del daño causa no puede ser argumentado para mejorar en forma automática la prisión. Por otro lado, se considera al peligro de fuga como elemento, ya que, si el procesado se escapa, en consecuencia, no se podría cumplir con la parte agraviada, en cuanto a su resarcimiento</p>	

Objetivo específico 4:

Determinar en qué medida la valoración del peligro de obstaculización influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte

Pregunta N° 11: ¿Según su criterio, en qué medida la valoración del peligro de obstaculización, influye en la vulneración del derecho fundamental de la libertad en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte?

Tabla N°.11

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Debemos entender que el peligro de obstaculización, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	El peligro de obstaculización es un peligro procesal bastante discutido e influye bastante en la restricción de la libertad del imputado.

Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	El entorpecimiento de la actividad probatoria es bastante importante todo ello, toda vez que depende de los medios probatorios se estaría en juego la libertad del imputado.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Siendo el delito de robo agravado un delito muy común que debe tomarse en cuenta que la obstaculización puede ser producido por el imputado dentro del proceso.
Verónica Torres Cuadros	Juez	El juez debe valorar todo el proceso, y verificar si realmente existe riesgo o peligro de fuga que permita evidenciar que el imputado quiera eludir a la justicia.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	No creo que intuya negativamente, ya que deben existir datos objetivos de obstaculizar o perturbar la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva.

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>El peligro de obstaculización como parte del tercer presupuesto material, cuando no concurre con los demás presupuestos, pero no es tomado en cuenta por el Juez, entonces se a una grave afectación al derecho a la libertad, lo que hasta la fecha desde la puesta en práctica de esta figura jurídica de la prisión preventiva este presupuesto es la que quizás menos amparo tuvo, vale decir que el juez no lo toma en cuenta en la mayoría de casos para negar el requerimiento de prisión, más bien en este extremo siempre se argumenta de que el proceso podría afectar los elementos de prueba e influenciar a los componentes del proceso, llámese co-imputado, testigos y otros, peor aún en el delito de robo agravado, donde se ha visto casos de cambio de versión o de retractación de hechos o de no colaboración en la</p>
----------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		administración de justicia, por tratos onerosos o por amenaza.
Roser Ruiz Valencia Garriozo	Abogado	La valoración del peligro de obstaculización, a mi criterio no transgrede el derecho fundamental de la libertad, si no por el contrario es prevenir que el imputado(s) adopte una conducta de entorpecimiento de la actividad probatoria con la finalidad de que el requerimiento del Ministerio Público no tome conocimiento de elementos de prueba que sustenten una incriminación.
Miguel Ángel Villa Zúñiga	Abogado	La libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho se “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.
Raúl Rubén Soto Aranda.	Abogado	Si bien es cierto que la Prisión preventiva es la última ratio, pero que se debe tener presente que el imputado podría influenciar

		<p>en la víctima, testigos y peritos, con la cual estaría en la posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria en la investigación., pues no se viola el derecho fundamental de la libertad, puesto que se trata del delito de Robo Agravado.</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Todos los entrevistados, coinciden en El peligro de obstaculización, para su valoración, no vulnera el derecho fundamental de la libertad, ya que el imputado tiene la posibilidad de demostrar con prueba documental que su conducta no se encontraría dentro del supuesto de peligro de fuga.</p> <p>Las entrevistas permitieron determinar, que los entrevistados coinciden que deben existir datos objetivos de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria y estos puedan servir de base para imponer una prisión preventiva, además de considerar que la libertad es un principio fundamental, empero ningún derecho es “absoluto”, siempre son pasibles de ser restringidos ante las circunstancias adecuadas.</p>	

Pregunta N° 12: ¿Qué medios probatorios son susceptibles a destruirse o modificarse durante la investigación preparatoria en el delito de robo agravado?

Tabla N°. 12

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	En primer lugar, un claro ejemplo de un medio de prueba susceptible a que se modifique, tenemos la declaración de un testigo, referencial que visualizó el preciso instante o momento en que una persona fue víctima de un asalto a mano armada. En segundo lugar, un modo probatorio destruido, se presentaría cuando una motocicleta que fue objeto de robo durante la noche por parte de varios sujetos descarriados, es destruida con el propósito en desaparecer todo indicio de la comisión de un hecho delictivo, circunstancia que imposibilitaría una adecuada actividad investigada.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Los medios probatorios son susceptibles a destruirse porque el imputado puede

		influnciar para ocultar o destruir evidencias que puedan comprometer al imputado
Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	En mi experiencia considero que los elementos probatorios pueden verse modificados o destruidos por el imputado, siendo que se requiere prisión preventiva para salvar los elementos de convicción.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Cuando se trata del delito de robo, el imputado busca eliminar o destruir los elementos de convicción, con el objetivo de evitar que sea recluido provisionalmente durante su proceso.
Verónica Torres Cuadros	Juez	En el proceso de prisión preventiva en el delito de robo, usualmente el imputado busca destruir o eliminar pruebas contundentes que lo involucren en un hecho delictivo en la cual se está vertiendo su libertad.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Por la gravedad del delito y gran connotación del mismo es de conocimiento

		que sus autos de este ilícito actúan con gran crueldad, armas de fuego o una banda criminal, y es evidente que pueda amedrentar a testigos y/o víctimas.
Marcos Antonio Tapia Rivas	Abogado	Usualmente en este tipo penal de robo agravado, lo que se evita con la no aceptación de la concurrencia de este presupuesto (peligro de obstaculización), es que el procesado gozando de comparecencia simple o restringida, puede poner en riesgo los elementos de prueba o influir en los actores del proceso, de esta forma distorsionar la postura o versión de los co – imputados, agraviado o testigos, teniendo en cuenta que las versiones brindadas en etapa preliminar o de investigación preparatoria, tiene que ser repetida en la etapa de juzgamiento.

<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Un claro ejemplo de un medio probatorio o de la prueba susceptible a que se modifique, tenemos la declaración de un testigo referencial que visualiza el preciso momento en que una persona fue víctima de un asalto a mano armada. Por otra parte, un ejemplo de un medio probatorio destruido sería cuando una motocicleta que habría sustraído ejerciendo violencia para ello, es destruido y/o desaparecida para que el Ministerio Público no tenga elementos de convicción suficientes que corroboren una responsabilidad penal.</p>
<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Fiscal Provincial</p>	<p>Mayormente tiende a desacreditarse la vinculación de los hechos con el autor del delito, o la violencia ejercida en la víctima, desacreditando el certificado médico legal</p>
<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>Los medios probatorios a destruirse son los documentales, así como la desaparición de los testigos o agraviados, como la modificatoria de las</p>

		pericias,es decir todo son vulnerables.
Conclusión	<p>Los entrevistados coinciden que los medios probatorios susceptibles a destruirse o modificarse son la declaración de un testigo, referencial que visualizó el preciso instante o momento en que una persona fue víctima de un asalto a mano armada. También, la destrucción de una motocicleta que fue objeto de robo durante la noche por parte de varios sujetos descarriados, con el propósito en desaparecer todo indicio de la comisión de un hecho delictivo, otro medio de prueba susceptible a modificarse, serían las armas de fuego, o que una banda criminal amedrente a los testigos y/o víctimas.</p>	

Pregunta N° 13: ¿Qué elementos probatorios son relevantes en la prisión preventiva en el delito de robo agravado?

Tabla N°. 13

Expertos	Cargo	Respuestas de expertos
Luciano Onofre Espíritu Alcántara	Fiscal Provincial	Los elementos probatorios relevantes son los siguientes: 1) Declaración de la víctima, 2) Declaración del denunciado, 3) Documentación que acredite la preexistencia del bien sustraído, 4) Declaración de un testigo referencial, 5) Acta de intervención policial, 6) Acta de registro personal.
Yoel Valverde Silva	Fiscal Provincial	Respecto del delito de prisión preventiva en el delito de robo agravado, normalmente se evidencia mediante medios probatorios como fotos, videos, o audios, siendo que estos elementos son contundentes para determinar el requerimiento de prisión preventiva.

Marco Antonio Santa Cruz Urbina	Fiscal Provincial	En mi experiencia he podido verificar, que los elementos probatorios se pueden sustentar a través de fotos, videos, y además declaraciones de testigos al momento de evaluar la prisión preventiva como medida de coerción.
Rosa Conopuma Genebroso	Juez	Los elementos probatorios contundentes y relevantes serían las fotos, videos, audios, declaraciones que son ofrecidos por parte del fiscal, siendo el juez de valorar los medios probatorios.
Verónica Torres Cuadros	Juez	La defensa técnica y el fiscal son las personas que ofrecen sus medios probatorios para defender su teoría del caso con el objetivo de resguardar que el proceso se lleve con legalidad.
Valery Raúl Romero Palacios	Juez	Violencia y/o amenaza, circunstancias agravantes (pluralidad de agentes, armas de fuego, violencia, etc.)

<p>Marcos Antonio Tapia Rivas</p>	<p>Abogado</p>	<p>El delito de robo agravado, como delito de resultado y en su mayoría de flagrancia delictiva, los elementos de convicción o de prueba son en su mayoría la lesión o amenaza a la parte agraviada, que se sustenta con una pericia médica, además del bien inmueble que debe ser probada su pre – existencia, así como el testimonio de los agentes policiales u otro tipo de testigo que haya presenciado el ilícito penal, aunado a ello los antecedentes del imputado, entre otros que le resulten relevantes para reforzar el requerimiento de la prisión preventiva.</p>
<p>Roser Ruiz Valencia Garriozo</p>	<p>Abogado</p>	<p>Los elementos probatorios más relevantes son la declaración de la víctima, la declaración del imputado, documentación que acredite la preexistencia del objeto o bien sustraído y la declaración de un testigo referencial.</p>
<p>Miguel Ángel Villa Zúñiga</p>	<p>Abogado</p>	<p>El certificado Médico Legal, el conocimiento de la víctima para su autor, la declaración de la víctima</p>

<p>Raúl Rubén Soto Aranda.</p>	<p>Abogado</p>	<p>El Acta de Intervención, así como el Acta de Registro personal, El Acta de reconocimiento por parte de la víctima y las pericias, como las declaraciones de los testigos y de la propia víctima.</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Los entrevistados señalan distintas respuestas acerca de los elementos probatorios, para la prisión preventiva, siendo los siguientes: La Declaración de la víctima, la Declaración del denunciado, la documentación que acredite la preexistencia del bien sustraído, la declaración de un testigo referencial, el acta de intervención policial, y el acta de registro personal. Otro entrevistado sostuvo que son la Violencia y/o amenaza, circunstancias agravantes (pluralidad de agentes, armas de fuego, violencia, etc.). Así mismo, otro entrevistado, consideró el certificado Médico Legal, el conocimiento de la víctima para su autor, la declaración de la víctima.</p>	